LIBRO SEGUNDO. De la parte general.

TÍTULO I. De la persona humana.

CAPÍTULO I. Comienzo de la existencia.

ARTÍCULO 15. Comienzo de la existencia. La existencia de las personas humanas comienza con la concepción

ARTÍCULO 16.- Tiempo de la concepción. Duración del embarazo. Se presume que la concepción ha tenido lugar en el espacio de tiempo entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo.

Se presume, salvo prueba en contrario, que el máximo de tiempo del embarazo es de trescientos días y el mínimo de ciento ochenta, excluyendo el del nacimiento.

ARTÍCULO 17. Nacimiento con vida. Los derechos y obligaciones que el concebido adquiere quedan irrevocables si nace con vida.

Si no se produce el nacimiento con vida, se considera que la persona nunca ha existido.

El nacimiento con vida se presume.

CAPÍTULO II. Capacidad.

ARTÍCULO 18. Capacidad de derecho. Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos o actos jurídicos determinados.

ARTÍCULO 19. Capacidad de ejercicio. Las personas humanas pueden ejercer por sí mismas sus derechos, salvo aquéllas a quienes la ley declara incapaces.

Son incapaces:

- a) Las personas por nacer.
- b) Los menores, con las excepciones previstas en la ley.
- c) Los interdictos por causas psíquicas, en la medida judicialmente dispuesta.

SECCIÓN PRIMERA. Menores.

ARTÍCULO 20.- Mayoría de edad. Son menores las personas que no tienen la edad de dieciocho años. Su incapacidad cesa el día en que cumplen esa edad.

ARTÍCULO 21. Emancipación. También cesa la incapacidad de los menores por la celebración del matrimonio, aunque haya sido contraído sin autorización, pero en este supuesto el emancipado no tiene hasta la mayoría de edad la administración y disposición de los bienes recibidos a título gratuito.

Los emancipados gozan de plena capacidad de ejercicio con las limitaciones previstas en los dos (2) artículos siguientes.

La emancipación es irrevocable. La invalidez del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, salvo respecto del cónyuge de mala fe para quien cesa a

partir del día en que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada.

Si algo fuese debido al menor con cláusula de no poder percibirlo hasta la mayoría de edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad.

ARTÍCULO 22.- Actos prohibidos. Los emancipados no pueden, ni con autorización judicial:

- a) Aprobar las cuentas de sus tutores y darles finiquito.
- b) Hacer donación de bienes que hubiesen recibido a título gratuito.
- c) Afianzar obligaciones.

ARTÍCULO 23. Actos sujetos a asistencia. Para la disposición de bienes recibidos a título gratuito, antes o después de la emancipación, el emancipado requiere el asentimiento del cónyuge, si fuese mayor de edad; o la autorización judicial si no lo fuese.

La autorización judicial debe ser otorgada cuando el acto sea de toda necesidad o de ventaja evidente.

ARTÍCULO 24. Menor con título profesional habilitante. El menor que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización. Tiene la administración y disposición de los bienes que adquiere con el producto de su profesión y puede estar en juicio civil o penal por cuestiones vinculadas a ella.

ARTÍCULO 25. Capacidad del menor que ha cumplido catorce (14) años. A partir de los catorce (14) años el menor tiene capacidad para:

- a) Estar en juicio penal seguido contra él.
- b) Reconocer hijos.
- c) Otorgar los actos o contratos concernientes al trabajo, y para estar en juicio relativo a él.
- d) Promover juicio civil contra un tercero, con autorización de sus padres. A falta de padres, o si éstos o uno de ellos niegan la autorización, el tribunal puede suplir la licencia previa audiencia del oponente, dando un tutor especial al menor.
- e) Administrar los bienes que adquiera con el producido de su trabajo.

ARTÍCULO 26.- Actos usuales. Los menores pueden concertar los actos usuales correspondientes a su edad y condición.

SECCIÓN SEGUNDA. Interdictos por causas psíquicas.

ARTÍCULO 27.- Interdictos. Puede ser interdicta a partir de la edad de catorce (14) años, la persona que, por causa de enfermedad mental o insuficiencia o debilitación de sus facultades psíquicas, es inepta para dirigir su persona o administrar sus bienes.

ARTÍCULO 28.- Legitimados. Están legitimados para solicitar la interdicción:

- a) El cónyuge no divorciado ni separado judicialmente o de hecho.
- b) Los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y los por afinidad hasta el segundo grado.
- c) El Ministerio Público.
- d) El propio interesado.

Si el denunciado es un menor, sólo están legitimados los padres, el tutor y el Ministerio Público.

ARTÍCULO 29.- Partes en el proceso. El denunciado es parte en el proceso, al cual puede aportar todas las pruebas que hagan a la defensa de su capacidad. Sin perjuicio de ello, interpuesta la solicitud de interdicción ante el tribunal del domicilio del denunciado, se le debe nombrar a un abogado como curador *ad litem* para que lo represente en el juicio.

El denunciante puede aportar las pruebas que acrediten los hechos que haya invocado.

ARTÍCULO 30.- Interdicción provisional. Durante el proceso el tribunal debe decretar la interdicción provisional si lo estima conveniente para la protección de la persona o el patrimonio del denunciado. A ese efecto debe nombrar un curador cuyas funciones deben fijarse en la resolución que la disponga. El curador debe recibir los bienes bajo inventario.

ARTÍCULO 31.- Prueba. La sentencia debe ser dictada previo examen del denunciado por médicos especializados. El dictamen debe, al menos, contener:

- a) Diagnóstico.
- b) Epoca en que la situación del denunciado se manifestó.
- c) Régimen aconsejable para la protección y asistencia del presunto insano.
- d) Conveniencia de su internación.

ARTÍCULO 32.- Sentencia. Alcance de la incapacidad. La sentencia que declara la interdicción debe determinar la extensión y los límites de la incapacidad; a tal efecto, si el estado del interdicto lo hace posible y conveniente, el tribunal debe especificar los actos que el interdicto puede realizar por sí o con asistencia del curador.

Si el tribunal considera que la persona está en situación de conservar su capacidad con ciertas limitaciones a los poderes de disposición, puede declarar su inhabilitación.

ARTÍCULO 33.- Internación. El tribunal puede disponer la internación del denunciado o la del interdicto en la sentencia o después de dictada. Para ello debe tener en cuenta:

- a) Que la persona tiene derecho a la alternativa terapéutica menos restrictiva de su libertad.

b) Que la finalidad de la internación es evitar que la persona se haga daño a sí misma o a terceros, y facilitar los tratamientos necesarios o convenientes de acuerdo con su estado.

ARTÍCULO 34.- Otras internaciones. El tribunal puede disponer la internación de personas no denunciadas ni declaradas interdictas en los términos de los artículos precedentes, si se dan los siguientes extremos:

a) Que se trate una persona que se encuentre en estado de causar daño a sí mismo o a terceros.

b) Que un médico psiquiatra se haya expedido sobre la necesidad de la internación.

c) Que un juez la haya entrevistado personalmente, salvo que razones de extrema urgencia lo hubieran impedido.

d) Que lo solicite una de las personas enumeradas por el artículo 28, o la autoridad policial.

ARTÍCULO 35. - Sentencia de internación. La sentencia que dispone una internación en el caso previsto en el artículo anterior, debe especificar su duración y finalidad.

Si, vencido el plazo de la internación subsisten las causas que la motivaron, ella sólo podrá ser reiterada en caso de que la persona sea denunciada como interdicto o inhabilitado por alguno de los legitimados para hacerlo.

ARTÍCULO 36.- Internación dispuesta por autoridad policial. La autoridad policial puede disponer la internación de personas cuyo estado no admita dilaciones. En este caso debe comunicarlo inmediatamente al tribunal en lo civil quien debe actuar de acuerdo a lo previsto por el artículo 34.

ARTÍCULO 37.- Actos del interdicto posteriores a la inscripción de la interdicción. Son inválidos los actos celebrados por el interdicto después de la inscripción de la interdicción definitiva o provisional en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, el que debe dejar constancia al margen del acta de nacimiento.

ARTÍCULO 38.- Actos anteriores. Los actos anteriores a la inscripción de la interdicción pueden ser invalidados, si se dictó sentencia declarando interdicta a la persona y se da alguno de los siguientes extremos:

a) La causa de la interdicción declarada es ostensible a la época de la celebración del acto.

b) El cocontrante es de mala fe.

c) El acto es a título gratuito.

ARTÍCULO 39.- Falta de sentencia. Si no hay sentencia, la invalidez de los actos otorgados por una persona carente de discernimiento por causa de enfermedad, insuficiencia o debilidad mental, exige la prueba de esa carencia en el momento

mismo del acto o de la mala fe del cocontratante.

ARTÍCULO 40.- Persona fallecida. No pueden impugnarse por carencia de discernimiento causada en enfermedad, insuficiencia o debilidad mental, los actos entre vivos otorgados por una persona fallecida, salvo que ello resulte del acto mismo, que la muerte haya acontecido después de promovida la declaración de interdicción del agente o se pruebe que el cocontratante actuó de mala fe.

ARTÍCULO 41. Cese de la interdicción. El cese de la incapacidad se decreta por el tribunal que la declaró, previo examen médico que se pronuncie sobre el restablecimiento de la persona.

Si el restablecimiento no es total el tribunal puede ampliar la nómina de actos que el interdicto puede realizar por sí o con la asistencia de su curador, o transformar la interdicción en inhabilitación.

SECCIÓN TERCERA. Inhabilitados.

ARTÍCULO 42.- Inhabilitados. Puede inhabilitarse judicialmente a los ebrios o toxicómanos consuetudinarios, y a los disminuidos en sus facultades físicas o psíquicas, cuando del ejercicio de su plena capacidad puede resultarles presumiblemente algún daño.

ARTÍCULO 43.- Procedimiento. Están legitimados para promover la declaración de inhabilitación las mismas personas que pueden promover la declaración de interdicción. Se aplican las normas del proceso de declaración de interdicción en cuanto sean compatibles, incluidas las referentes a la cesación.

ARTÍCULO 44.- Efectos. La declaración de inhabilitación importa la designación de un curador que debe asistir al inhabilitado en el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y en los demás actos que el tribunal fije en la sentencia.

El tribunal puede adoptar medidas tendientes a la protección de la persona del inhabilitado y a la recuperación de su salud, cuyo cumplimiento o control estará a cargo del curador, tomando en consideración las causas que han dado lugar a la inhabilitación.

CAPÍTULO III. Representación de los incapaces.

SECCIÓN PRIMERA. Disposiciones generales.

ARTÍCULO 45.- Principio. Los incapaces ejercen sus derechos por medio de sus representantes.

SECCIÓN SEGUNDA. Representación legal.

ARTÍCULO 46.- Enumeración. Son representantes:

- a) De las personas por nacer y de los menores no emancipados, sus padres. Si faltan los padres, o ambos son incapaces, o están privados de la patria potestad, o suspendidos en su ejercicio, el tutor que se les designe.
- b) De los interdictos, el curador que se les nombre.

SECCIÓN TERCERA. Representación promiscua.

ARTÍCULO 47.- Alcance. El Ministerio Público ejerce la representación promiscua de los incapaces. Es parte esencial en los actos para cuya celebración los representantes necesarios deben obtener autorización judicial, los que son inválidos si se otorgan sin su intervención.

ARTÍCULO 48.- Actuación judicial. El Ministerio Público debe ejercer las acciones necesarias para proveer a los incapaces de su representante legal, así como las que tengan por objeto vigilar o exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los padres, tutores y curadores. También es parte esencial en todos los procesos judiciales en los que intervenga un incapaz.

SECCIÓN CUARTA. Tutela.

PARÁGRAFO 1º. Disposiciones generales.

ARTÍCULO 49.- Caracteres. El cargo de tutor es unipersonal e intransmisible; se ejerce bajo la vigilancia del Ministerio Público. Nadie puede excusarse de su desempeño sin justa causa.

ARTÍCULO 50.- Tutor designado por los padres. El padre o madre supérstite que no fue privado de la patria potestad o suspendido en su ejercicio, puede nombrar tutor a los hijos por escritura pública o testamento. Esta designación debe ser aprobada judicialmente.

El nombramiento puede estar sometido a cualquier condición no prohibida. Se tienen por no escritas las que eximen al tutor de hacer inventario, le autorizan a recibir los bienes sin cumplir ese requisito o lo liberan del deber de rendir cuentas.

Si la designación de tutor se hace a favor de varias personas, el cargo debe ser desempeñado por uno a falta de otro, en el orden de su nombramiento.

ARTÍCULO 51.- Tutela legítima. La tutela legítima tiene lugar cuando los padres no han nombrado tutor a sus hijos, o cuando los nombrados no entran a ejercer la tutela, o dejan de ser tutores.

La tutela legítima corresponde únicamente a los abuelos, tíos, hermanos o medio hermanos del menor, sin distinción de sexos, y al padrastro o madrastra. De entre ellos el tribunal dará la tutela legítima a quien por su relación afectiva con el menor, reputación y solvencia aparece como el más idóneo para ejercerla, teniendo en cuenta los intereses del menor.

ARTÍCULO 52.- Tutela dativa El tribunal debe nombrar tutor al menor que no la tenga asignada por sus padres y cuando no existan los parientes llamados a ejercer la tutela legítima, o cuando existiendo, no sean capaces o idóneos, la hayan dimitido o hayan sido removidos de ella.

ARTÍCULO 53.- Personas inhabilitadas para ser tutores dativos. El tribunal no puede conferir la tutela dativa:

a) Al cónyuge o parientes consanguíneos o afines dentro del cuarto grado, de los

jueces que lo integran.

- b) A los amigos íntimos de los integrantes del tribunal, ni a los de sus parientes dentro del mismo grado.
- c) A los que tengan intereses comunes con los jueces que lo integran.
- d) A los deudores o acreedores de los jueces que lo integran.
- e) A los integrantes de los tribunales nacionales o provinciales que ejerzan sus funciones en el lugar del nombramiento; ni a los que tengan con ellos intereses comunes, ni a sus amigos íntimos o parientes dentro del mismo grado.
- f) A quien sea tutor de otro menor, a menos que se trate de menores hermanos o existan causas que lo justifiquen.

Estas prohibiciones no rigen para los parientes de los incapaces ni para los pupilos sin recursos.

ARTÍCULO 54.- Tutela especial. El tribunal debe dar a los menores tutores especiales, si:

- a) Los intereses de los incapaces están en oposición con los de sus representantes.
- b) Los padres pierden la administración de los bienes de los hijos.
- c) Los menores reciben bienes cuya administración no les corresponda a ellos, ni a sus padres ni a su tutor.
- d) Existen intereses encontrados entre el menor y otro incapaz que se encuentra bajo tutela o curatela del padre o tutor.
- e) El pupilo tiene bienes fuera de la jurisdicción del tribunal, que no pueden ser administrados convenientemente por el tutor.
- f) El pupilo tiene bienes o negocios que exigen conocimientos especiales o una administración separada.
- g) Existen razones de urgencia, mientras se tramita la designación del tutor que corresponda.

ARTÍCULO 55.- Personas excluidas. No pueden ser tutores:

- a) Los que no tienen domicilio en la República.
- b) Los quebrados no rehabilitados.
- c) Los que han sido privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad, o han sido removidos de la tutela o curatela de otro incapaz, por causa que les es atribuible.
- d) Los que deben ejercer por largo tiempo o plazo indefinido un cargo o comisión fuera del país.
- e) Los que no tienen oficio, profesión o modo de vivir conocido, o tienen mala conducta notoria.

- f) Los condenados a reclusión o prisión por delito no culposo.
- g) Los deudores o acreedores del pupilo por sumas considerables.
- h) Los que tienen, ellos, sus padres, hijos o cónyuge, pleitos con el incapaz sobre su estado o bienes.
- i) Las personas que, estando obligadas, omitan la denuncia de los hechos que dan lugar a la apertura de la tutela.
- j) Los incapaces e inhabilitados.

ARTÍCULO 56.- Obligados a denunciar. Los parientes habilitados para ejercer la tutela legítima y los tutores designados por los padres, deben denunciar al tribunal competente cualquier hecho que dé lugar a la apertura de la tutela, dentro de los diez (10) días de haberlo conocido. Si no lo hacen quedan excluidos para ser tutores.

Tienen la misma obligación los oficiales públicos encargados del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas y otros funcionarios públicos que, en ejercicio de su cargo, tengan conocimiento de cualquier hecho que dé lugar a la apertura de la tutela.

El tribunal proveerá de oficio lo que corresponda cuando tenga conocimiento de un hecho que motive la apertura de una tutela.

PARÁGRAFO 2º . Discernimiento de la tutela.

ARTÍCULO 57.- Discernimiento judicial. Competencia. La tutela es siempre discernida por el tribunal.

Para el discernimiento de la tutela es competente el tribunal del domicilio del progenitor al tiempo de terminación de la patria potestad. Si es un menor abandonado es competente el tribunal del lugar donde se encuentre.

El tribunal que ha discernido la tutela es competente en todo lo relativo a ella hasta su terminación.

ARTÍCULO 58.- Audiencia del menor. Para el discernimiento de la tutela, y para cualquier otra decisión relativa a ella, el tribunal debe oír previamente al menor que esté en condiciones de formarse un juicio propio, teniendo en cuenta sus manifestaciones en función de su edad y madurez, y decidir atendiendo primordialmente a sus intereses.

ARTÍCULO 59.- Actos anteriores al discernimiento de la tutela. Los actos del tutor anteriores al discernimiento de la tutela quedan confirmados por el nombramiento, si de ello no resulta perjuicio para el menor.

ARTÍCULO 60.- Inventario y avalúo. Discernida la tutela, los bienes del pupilo deben ser entregados al tutor previo inventario y avalúo, que realice quien designe el tribunal.

Si el tutor tiene un crédito contra el incapaz, debe hacerlo constar en el inventario; si no lo hace no puede reclamarlo luego, salvo que al omitirlo haya

ignorado su existencia.

Hasta tanto se haga el inventario, el tutor sólo puede tomar las medidas que sean urgentes y de necesidad.

Los bienes que el menor adquiriera por sucesión u otro título deben inventariarse y tasarse de la misma forma.

ARTÍCULO 61.- Rendición de cuentas. Si el tutor sucede a alguno de los padres o a otro tutor anterior, debe pedir inmediatamente, al sustituido o a sus herederos, rendición judicial de cuentas y entrega de los bienes del pupilo.

PARÁGRAFO 3º . Ejercicio de la tutela.

ARTÍCULO 62.- Contenido. La tutela atribuye la representación legal del incapaz y el cuidado de su persona y bienes, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la patria potestad. Se ejerce bajo el control del Ministerio Público.

El tutor es responsable de todo perjuicio resultante del incumplimiento de sus deberes. El menor, cualquiera de sus parientes o el Ministerio Público pueden reclamar del tribunal las providencias necesarias para remediar la incuria del tutor, sin perjuicio de las facultades del tribunal para adoptarlas oficiosamente.

El tutor no puede, ni con autorización judicial, celebrar con el pupilo los actos prohibidos a los padres respecto de sus hijos menores.

ARTÍCULO 63.- Educación y alimentos. El tribunal debe fijar la suma anual para la educación y alimentos del menor, ponderando la cuantía de sus bienes y la renta que producen, sin perjuicio de adecuarla a necesidades ulteriores. Se debe atender también a lo dispuesto en el acto de última voluntad del padre o madre o de quienes hayan dejado bienes al pupilo.

Si los recursos del pupilo no son suficientes para atender a su cuidado y educación, el tutor puede, con autorización judicial, demandar alimentos a los obligados a prestarlos. El pariente que provea voluntariamente los alimentos puede solicitar al tribunal la guarda del menor.

ARTÍCULO 64.- Actos que requieren autorización judicial. El tutor debe requerir autorización judicial para los actos siguientes:

- a) Aquellos para los cuales los padres requieren autorización judicial.
- b) Adquirir inmuebles o cualquier bien que no sea útil para satisfacer los requerimientos alimentarios del pupilo.
- c) Prestar dinero de sus pupilos. La autorización sólo será concedida si existen garantías reales suficientes.
- d) Dar en locación los bienes de los pupilos o celebrar contratos con finalidad análoga por plazo superior a tres (3) años. De todos modos, concluyen a la mayor edad del pupilo, aunque el contrato sea por tiempo fijo.
- e) Contraer deudas, repudiar herencias o donaciones, hacer transacciones y remitir créditos aunque el deudor sea insolvente.

f) Todo acto en que estén directa o indirectamente interesados sus parientes dentro del cuarto grado o sus socios o amigos íntimos.

ARTÍCULO 65.- Derechos reales sobre bienes del pupilo. El tribunal puede autorizar la transmisión, constitución o modificación de derechos reales sobre los bienes del menor, sólo si media conveniencia evidente.

Los bienes que tienen valor afectivo o cultural sólo pueden ser vendidos en caso de absoluta necesidad.

ARTÍCULO 66.- Forma de las ventas. Las ventas deben hacerse en subasta pública, salvo que se trate de muebles de escaso valor o si, a juicio del tribunal, la venta extrajudicial puede ser más conveniente, con tal que el precio que se ofrezca sea superior al de la tasación.

ARTÍCULO 67.- Dinero. El dinero del pupilo, luego de ser cubiertos los gastos de la tutela, debe ser colocado a interés en bancos o invertido en títulos públicos, a nombre del pupilo y a la orden del tribunal. El tutor no puede retirar fondos, títulos o valores sin autorización judicial.

ARTÍCULO 68.- Fideicomiso. El tribunal puede autorizar que los bienes del pupilo sean transmitidos en fideicomiso a una entidad autorizada para ofrecerse públicamente como fiduciario, hasta la mayoría de edad del pupilo.

ARTÍCULO 69.- Sociedad. Si el pupilo tiene parte en una sociedad, el tutor está facultado para ejercer los derechos que corresponden al socio a quien el pupilo haya sucedido. Si tiene que optar entre la continuación y la disolución de la sociedad, el tribunal debe decidir previo informe del tutor.

ARTÍCULO 70.- Fondo de comercio. Si el pupilo es propietario de un fondo de comercio, el tutor está autorizado para ejecutar todos los actos de administración ordinaria propios del establecimiento. Los actos que exceden de aquélla, deben ser autorizados por el tribunal.

Si la continuación de la explotación resulta perjudicial, el tribunal debe autorizar el cese del negocio facultando al tutor para enajenarlo, previa tasación en subasta pública o venta privada, según sea más conveniente. Mientras no se venda, el tutor está autorizado para proceder como mejor convenga a los intereses del pupilo.

ARTÍCULO 71.- Retribución del tutor. El tutor tiene derecho a percibir como retribución la que fije el tribunal teniendo en cuenta la importancia de los bienes del pupilo y el trabajo que ha demandado su administración en cada período. No puede exceder de la décima parte de los frutos líquidos de los bienes del menor.

Los frutos pendientes al comienzo de la tutela y a su finalización deben computarse a los efectos de la retribución, en la medida en que la gestión haya sido útil para su percepción.

La retribución debe ser fijada y percibida cada vez que el tutor rinda cuentas de su gestión, después de ser aprobada por el tribunal.

ARTÍCULO 72.- Carencia del derecho a retribución. El tutor no tiene derecho a retribución:

- a) Si nombrado por un testador, éste le ha dejado algún legado que puede estimarse remuneratorio de su gestión. Puede optar por renunciar al legado o devolverlo, percibiendo la retribución legal.
- b) Si las rentas del pupilo no alcanzan para satisfacer los gastos de sus alimentos y educación.
- c) Si fue removido de la tutela por causa atribuible a su culpa o dolo, caso en el cual debe también restituir lo percibido, sin perjuicio de las responsabilidades por los daños que cause.
- d) En el caso del artículo 410.

PARÁGRAFO 4º . Cuentas de la tutela.

ARTÍCULO 73.- Deber de rendir cuentas. Periodicidad. El tutor debe llevar cuenta fiel y documentada de las entradas y gastos de su gestión y rendirla al término de cada año; al cesar en el cargo o cuando el tribunal lo ordena; a pedido del pupilo que se encuentra en las condiciones del artículo 56, tercer párrafo, o del Ministerio Público si hay dudas sobre la buena administración del tutor.

Aprobada la cuenta del primer año, puede disponerse que las posteriores se rindan en otros plazos, cuando la naturaleza de la administración así lo justifique.

ARTÍCULO 74.- Rendición final. Terminada la tutela, el tutor o sus herederos deben entregar de inmediato los bienes e informar de la gestión, dentro del plazo que el tribunal señale, aunque el pupilo en su testamento lo exima de ese deber. La cuenta debe rendirse judicialmente con intervención del Ministerio Público. Debe presentarse al pupilo si ha llegado a la mayoría de edad, o a su representante legal, con intervención del pupilo si está en las condiciones del artículo 56, tercer párrafo.

ARTÍCULO 75.- Gastos de la rendición. Los gastos de la rendición de cuentas deben ser adelantados por el tutor y le serán reembolsados por el pupilo si son rendidas en debida forma.

ARTÍCULO 76.- Gastos de la gestión. El tutor tiene derecho a la restitución de los gastos razonables que haya hecho en la gestión, aunque de ellos no resulte utilidad al pupilo.

ARTÍCULO 77.- Saldos. Los saldos de la cuenta devengan intereses retributivos.

ARTÍCULO 78.- Daños. Si el tutor no rinde la cuenta, no lo hace debidamente o se comprueba su mala administración atribuible a dolo o culpa, el pupilo tiene derecho a ser indemnizado. La indemnización no debe ser inferior a lo que los bienes del menor han podido razonablemente producir.

ARTÍCULO 79.- Incapacidad para contratar. El pupilo cuya incapacidad cesó no puede celebrar contrato alguno con el tutor antes de aprobada judicialmente la

cuenta final.

PARÁGRAFO 5º . Terminación de la tutela.

ARTÍCULO 80.- Causas de terminación de la tutela. La tutela termina:

- a) Por la muerte o incapacidad del tutor, su remoción o su renuncia aceptada por el tribunal.
- b) Por la muerte o el cese de la incapacidad del pupilo o por quedar sujeto a patria potestad.

Muerto el tutor, su albacea o heredero debe ponerlo en conocimiento inmediato del tribunal de la tutela y adoptar las medidas urgentes para la protección de la persona y de los bienes del pupilo. Si no lo hace, se aplica lo dispuesto en el artículo 55.

ARTÍCULO 81.- Remoción del tutor. Son causas de remoción del tutor:

- a) Quedar comprendido en alguna de las causales de inhabilidad previstas en el artículo 54.
- b) No hacer el inventario de los bienes del pupilo, o no hacerlo fielmente.
- c) No cumplir debidamente con sus deberes respecto del pupilo o de sus bienes.

Están legitimados para demandar la remoción del tutor, el pupilo que esté en las condiciones del artículo 56, tercer párrafo, el Ministerio Público, y los parientes del pupilo que según este Código pueden ser sus tutores. También puede disponerla el tribunal de oficio.

SECCIÓN QUINTA. Curatela.

ARTÍCULO 82.- Régimen. La curatela se rige por las reglas de la tutela que no se modifican en esta Sección.

La principal función del curador es la de cuidar la persona del interdicto y tratar que recupere su salud, y a tal fin debe aplicar preferentemente las rentas de los bienes del interdicto.

ARTÍCULO 83.- Personas que pueden ser curadores. El cónyuge no separado judicialmente o de hecho es curador del interdicto. En su defecto, el tribunal puede nombrar a quien tenga mayor solvencia moral y económica entre los hijos, padres y hermanos del interdicto.

Los padres pueden nombrar curadores a sus hijos interdictos en los casos y con las formas en que pueden designarles tutores.

ARTÍCULO 84.- Interdictos con hijos. El curador del interdicto es tutor de los hijos menores de éste; si la interdicta es una mujer embarazada, es tutor de la persona por nacer.

SECCIÓN SEXTA. Patronato del Estado.

ARTÍCULO 85.- Fines. El patronato tiene por finalidad la atención de la seguridad y de la salud moral, intelectual y física de los incapaces.

ARTÍCULO 86.- Organos. El patronato del Estado nacional o provincial sobre los incapaces se debe ejercer por medio de los tribunales, quienes, con intervención del Ministerio Público, tienen a su cargo el cuidado de los incapaces y la vigilancia de la gestión de sus representantes necesarios.

ARTÍCULO 87.- Guarda de menor abandonado. El menor abandonado o confiado a un establecimiento de beneficencia, privado o público, queda bajo guarda del Consejo Nacional del Menor y la Familia o de la autoridad que se designe en jurisdicción provincial.

CAPÍTULO IV. Nombre.

ARTÍCULO 88.- Derecho y deber. La persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponden.

ARTÍCULO 89.- Reglas concernientes al prenombre. La elección del prenombre está sujeta a las reglas siguientes:

a) Su elección corresponde a los padres o a las personas a quienes den su autorización para tal fin; a falta o impedimento de uno de los padres corresponde la elección o dar la autorización al otro. En defecto de todos ellos, debe hacerse por los guardadores, el Ministerio Público o el funcionario del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

b) No pueden inscribirse más de tres (3) prenombrados, apellidos como prenombrados, primeros prenombrados idénticos a primeros prenombrados de hermanos vivos, ni aquellos que sean equívocos con relación al sexo de la persona. Tampoco pueden inscribirse prenombrados extravagantes o que expresen tendencias políticas o ideológicas.

ARTÍCULO 90.- Apellido de los hijos matrimoniales. Los hijos matrimoniales deben llevar el apellido del padre. A pedido de los padres, o del interesado a partir de los dieciocho (18) años, pueden agregar el apellido de la madre.

El hijo extramatrimonial debe llevar el apellido del progenitor que primero lo reconoce o cuya maternidad o paternidad es declarada por sentencia. Si es reconocido por ambos padres simultáneamente se aplica lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.

Si el reconocimiento de la madre precede al del padre, el tribunal puede disponer que se mantenga el apellido materno si existen razones para ello. En este último caso el hijo puede optar por el apellido paterno, pudiendo agregar el materno dentro de los dos (2) años posteriores a la mayoría de edad, a su emancipación, o al reconocimiento paterno si es posterior.

ARTÍCULO 91.- Apellido de menores no reconocidos. El menor no reconocido debe ser anotado por el oficial del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con un apellido común o con el que está usando.

ARTÍCULO 92.- Casos especiales. La persona mayor de dieciocho (18) años que carezca de apellido inscripto puede pedir la inscripción del que está usando.

ARTÍCULO 93.- Mujer casada. La mujer casada puede usar el apellido del marido, con la preposición "de" o sin ella.

Salvo la existencia de motivos graves, la mujer separada judicialmente puede continuar usando el apellido del marido si lo ha estado haciendo antes de la separación.

La mujer divorciada o cuyo matrimonio ha sido invalidado no puede usar el apellido del que fue su marido, salvo que el tribunal por motivos razonables la autorice a conservarlo

La mujer viuda puede seguir usando el apellido del marido mientras no contraiga nuevas nupcias.

ARTÍCULO 94.- Adopción. El adoptado debe llevar el apellido del adoptante. Si los adoptantes son cónyuges, a pedido de éstos, o del interesado a partir de los dieciocho (18) años, puede agregar el apellido de la madre. Si la adoptante es viuda o mujer casada cuyo marido no adoptó al menor, éste debe llevar el apellido de aquélla, salvo que existan causas justificadas para imponerle el de casada.

El adoptado por adopción simple puede, a partir de los dieciocho (18) años, solicitar la agregación de su apellido anterior a la adopción.

Si se revoca la adopción, el adoptado pierde el uso del apellido del adoptante, salvo que sea autorizado fundadamente por el tribunal para conservarlo.

Puede cambiarse el prenombre del adoptado si tiene menos de seis (6) años de edad. Si tiene seis (6) años, pueden agregarse nombres hasta el límite establecido en el artículo 89, inciso b).

ARTÍCULO 95.- Cambio de nombre. El cambio de prenombre o apellido sólo procede si existen justos motivos a criterio del tribunal.

ARTÍCULO 96.- Proceso. Todos los cambios de prenombre o apellido deben tramitar por el proceso más abreviado que prevea la ley local, con intervención del Ministerio Público. El pedido debe publicarse en el diario oficial una vez por mes durante dos (2) meses. Puede formularse oposición dentro de los quince (15) días contados desde la última publicación. La sentencia debe dictarse previa información sobre medidas precautorias. Es oponible a terceros desde su inscripción en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Deben rectificarse todas las partidas, títulos y asientos registrales que sea necesario.

ARTÍCULO 97.- Acciones de protección del nombre. Puede ejercer acciones en defensa de su nombre:

- a) La persona a quien le es desconocido el uso de su nombre, para que le sea reconocido y se prohíba toda futura impugnación por quien lo negase.
- b) Aquel cuyo nombre es indebidamente usado por otro para su propia designación, para que cese en ese uso.

c) Aquel cuyo nombre es usado para la designación de cosas o personajes de fantasía, si ello le causa perjuicio material o moral, para que cese el uso.

En todos los casos puede demandarse la reparación de los daños y el tribunal puede disponer la publicación de la sentencia.

Las acciones pueden ser ejercidas exclusivamente por el interesado; si ha fallecido, por sus descendientes o cónyuge, y a falta de éstos por los ascendientes o hermanos de aquél.

ARTÍCULO 98.- Seudónimo. El seudónimo notorio goza de la tutela del nombre.

CAPÍTULO V. Domicilio.

ARTÍCULO 99.- Ubicación. La persona humana tiene domicilio en el lugar de su residencia habitual.

Si ejerce actividad profesional o económica lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad.

ARTÍCULO 100.- Incapaces. Los incapaces tienen el domicilio de su representante legal.

ARTÍCULO 101.- Domicilio ignorado. La persona cuyo domicilio no es conocido lo tiene en el lugar donde se encuentra; y si éste también se ignora en el último domicilio conocido.

ARTÍCULO 102.- Cambio de domicilio. El domicilio se cambia al establecer la residencia en otro lugar, con la intención de permanecer en él.

ARTÍCULO 103.- Domicilio especial. Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan.

ARTÍCULO 104.- Efecto. El domicilio determina la competencia de las autoridades en las relaciones jurídicas. La elección de un domicilio produce la prórroga de la competencia.

CAPÍTULO VI. Derechos de la personalidad.

ARTÍCULO 105.- Derechos. La persona humana afectada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la reparación de los daños sufridos.

ARTÍCULO 106.- Falsa denuncia o querrela. El denunciante o querellante responde por los daños derivados de la falsedad de la denuncia o de la querrela, si se acredita que no había razones justificables para creer que el damnificado estaba implicado.

ARTÍCULO 107.- Derecho a la imagen. Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, salvo en los siguientes casos:

- a) Si la persona participa en actos públicos.
- b) Si existe un interés científico, cultural o educacional prioritario, y se toman las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario.
- c) Si se trata del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general.

La reproducción de la imagen de las personas fallecidas se rige por lo dispuesto en el artículo 108 segundo párrafo. Pasados veinte (20) años desde la muerte es libre la reproducción no ofensiva.

ARTÍCULO 108.- Disposición de estos derechos. El consentimiento para la disposición de los derechos a que se alude en los artículos precedentes, es admitido si no es contrario a la ley, la moral y las buenas costumbres; no se presume y es de interpretación estricta. Puede ser libremente revocado pero deben resarcirse los daños que la revocación provoca, salvo norma legal en contrario.

En caso de personas fallecidas, pueden prestar su consentimiento sus herederos o el designado por el causante en una disposición de última voluntad. Si hay desacuerdo entre herederos de un mismo grado, resolverá el tribunal.

ARTÍCULO 109.- Medidas. Además de lo dispuesto por el artículo 105, el damnificado por atentados a su personalidad tiene derecho a:

- a) Exigir que el atentado que ha comenzado a ser ejecutado cese inmediatamente, sin necesidad de acreditar culpa o dolo del autor.
- b) Solicitar las publicaciones que le sean satisfactorias.

En caso de fallecimiento del titular las acciones pueden ser continuadas por sus herederos.

ARTÍCULO 110.- Actos de disposición sobre el propio cuerpo. Están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o resultan contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres, salvo que sean requeridos para la curación o el mejoramiento de la salud de la persona.

La dación de órganos para ser implantados en otras personas se rige por la legislación especial.

El consentimiento para los actos no comprendidos en la prohibición establecida en el primer párrafo, no puede ser suplido y su revocación no causa responsabilidad alguna.

ARTÍCULO 111.- Prácticas eugenésicas. Quedan prohibidas las prácticas eugenésicas tendientes a la selección de genes, sexo o caracteres físicos o raciales de seres humanos.

Ninguna modificación puede ser realizada a los caracteres genéticos con la finalidad de alterar los caracteres de la descendencia de la persona, salvo que tenga por objeto exclusivo evitar la transmisión de enfermedades o la

predisposición a ellas.

Es prohibida toda práctica que afecte la integridad de la especie humana, o que de cualquier modo tienda a la selección de las personas, o la modificación de la descendencia mediante la transformación de los caracteres genéticos. Quedan a salvo las investigaciones que tiendan a la prevención y tratamiento de enfermedades genéticas.

ARTÍCULO 112.- Consentimiento del paciente. Nadie puede ser sometido sin su consentimiento a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos, cualquiera que sea su naturaleza, salvo disposición legal en contrario.

ARTÍCULO 113.- Sustitución del consentimiento. Si el paciente es incapaz de ejercicio o no está en aptitud de expresar su voluntad, debe recabarse el consentimiento de su representante legal, cónyuge o pariente más próximo o allegado que en presencia del médico se ocupe de él. En ausencia de todos ellos, el médico puede prescindir del consentimiento si su actuación tiene por objeto evitar un mal grave al paciente.

La negativa injustificada de las personas antes mencionadas a consentir un acto médico requerido por el estado de salud del incapaz, se suple por autorización judicial.

ARTÍCULO 114.- Consentimiento informado. Cuando las circunstancias lo aconsejan, el paciente o quien debe dar su consentimiento en el caso del artículo precedente, debe ser informado razonablemente sobre el procedimiento médico, sus consecuencias y sus posibilidades curativas.

ARTÍCULO 115.- Actos peligrosos. No es exigible el cumplimiento del contrato que tiene por objeto la realización de actos peligrosos para la vida o la integridad de una persona, salvo que correspondan a su actividad habitual y que se adopten las medidas de prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias.

ARTÍCULO 116.- Exequias. La persona capaz de otorgar testamento puede disponer, por cualquier forma, el modo y circunstancias de sus exequias e inhumación, así como la dación de todo o parte del cadáver con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar. Si no se expresa la voluntad del fallecido, la decisión corresponde al cónyuge no separado judicialmente, y en su defecto a los parientes según el orden sucesorio, quienes no pueden dar al cadáver un destino contrario a los principios religiosos del difunto.

CAPÍTULO VII. Ausencia.

ARTÍCULO 117.- Procedencia. Si una persona ha desaparecido de su domicilio, sin tenerse noticias de ella, y sin haber dejado apoderado, puede designarse un curador a sus bienes si el cuidado de éstos lo exige. La misma regla se debe aplicar si, existiendo apoderado, sus poderes son insuficientes o no desempeña convenientemente el mandato.

ARTÍCULO 118.- Legitimados. Pueden pedir la declaración de ausencia, el

Ministerio Público y toda persona que tenga interés legítimo respecto de los bienes del ausente.

ARTÍCULO 119.- Tribunal competente. Es competente el tribunal del domicilio del ausente. Si éste no lo tuvo en el país, o no es conocido, es competente el tribunal del lugar en que existan los bienes.

ARTÍCULO 120.- Procedimiento. El presunto ausente debe ser citado por edictos durante cinco (5) días, y si vencido el plazo no comparece se debe dar intervención al defensor oficial, o en su defecto nombrarse defensor al ausente. El Ministerio Público es parte necesaria en el juicio.

Si antes de la declaración de ausencia se promueven acciones contra el ausente, debe representarlo el defensor.

En caso de urgencia el tribunal puede designar un administrador provisional o adoptar las medidas que las circunstancias aconsejen.

ARTÍCULO 121.- Sentencia. Oído el defensor, si concurren los extremos legales, se debe declarar la ausencia y nombrar curador. Para la designación se debe tener en cuenta el orden previsto para el discernimiento de curatela a los incapaces.

El curador sólo puede realizar los actos de conservación y administración ordinaria de los bienes. Todo acto que exceda la administración ordinaria debe ser autorizado por el tribunal; la autorización debe ser otorgada sólo en caso de necesidad evidente e impostergable.

Los frutos de los bienes administrados deben ser utilizados para el sostenimiento de los descendientes, cónyuge y ascendientes del ausente, o de quienes hubiesen convivido con él antes de la desaparición.

ARTÍCULO 122.- Conclusión de la curatela. Termina la curatela del ausente por:

- a) La presentación del ausente, personalmente o por apoderado.
- b) Su muerte.
- c) Su fallecimiento presunto judicialmente declarado.

CAPÍTULO VIII. Presunción de fallecimiento.

ARTÍCULO 123.- Caso ordinario. La ausencia de una persona de su domicilio o residencia en la República, sin que se tenga noticia de ella por el término de tres (3) años, causa la presunción de su fallecimiento aunque haya dejado apoderado.

El plazo debe contarse desde la fecha de la última noticia del ausente.

ARTÍCULO 124.- Casos extraordinarios. Se presume también el fallecimiento de un ausente:

- a) Si se encontró en el lugar de un incendio, terremoto, acción de guerra u otro suceso semejante, susceptible de ocasionar la muerte, o participó de una actividad que implique el mismo riesgo, y no se tiene noticia de él por el término de dos (2) años, contados desde el día en que ocurrió o pudo haber ocurrido el suceso.

b) Si encontrándose en un buque o aeronave naufragados o perdidos, no se tuviese noticia de su existencia por el término de seis (6) meses desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido.

ARTÍCULO 125.- Legitimados. Cualquiera que tenga algún derecho subordinado a la muerte de la persona de que se trate puede pedir la declaración de fallecimiento presunto, justificando los extremos legales y la realización de diligencias tendientes a la averiguación de la existencia del ausente.

Es competente el tribunal del domicilio o residencia del ausente.

ARTÍCULO 126.- Procedimiento. Curador a los bienes. El tribunal debe nombrar defensor al ausente o dar intervención al defensor oficial, y citar a aquél por edictos una vez por mes durante seis meses. También debe designar un curador a sus bienes, si no hay mandatario con poderes suficientes, incluso el que prevé el artículo 117 o si por cualquier causa aquél no desempeña correctamente el mandato.

La declaración de ausencia prevista en el Capítulo VII no constituye presupuesto necesario para la declaración de fallecimiento presunto, ni suple la comprobación de las diligencias realizadas para conocer la existencia del ausente.

ARTÍCULO 127.- Declaración del fallecimiento presunto. Pasados los seis (6) meses, recibida la prueba y oído el defensor, el tribunal debe declarar el fallecimiento presunto si están acreditados los extremos legales, fijar el día presuntivo del fallecimiento y disponer la inscripción de la sentencia.

ARTÍCULO 128.- Día presuntivo del fallecimiento. Debe fijarse como día presuntivo del fallecimiento:

- a) En el caso ordinario, el último día del primer año y medio.
- b) En el primero de los casos extraordinarios, el día del suceso, y si no está determinado, el día del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido.
- c) En el segundo caso extraordinario, el último día en que se tuvo noticia del buque o aeronave perdidos.

Si es posible, la sentencia debe determinar también la hora presuntiva del fallecimiento. En caso contrario, se tiene por sucedido a la expiración del día declarado como presuntivo del fallecimiento.

ARTÍCULO 129.- Entrega de los bienes. Inventario. El heredero y el legatario deben recibir los bienes del declarado presuntamente fallecido, previa formación de inventario. El dominio debe inscribirse en el registro correspondiente con la prenotación del caso; puede hacerse la partición de los bienes, pero no enajenarlos ni gravarlos sin autorización judicial.

Si entregados los bienes se presenta el ausente o se tiene noticia cierta de su existencia, queda sin efecto la declaración de fallecimiento, procediéndose a la devolución de aquéllos a petición del interesado.

ARTÍCULO 130.- Conclusión de la prenotación. La prenotación queda sin efecto transcurridos cinco (5) años desde la fecha presuntiva del fallecimiento u ochenta (80) desde el nacimiento de la persona. Desde ese momento puede disponerse libremente de los bienes.

Si el ausente reaparece puede reclamar la entrega de los bienes que existen en el estado en que se hallan; los adquiridos con el valor de los que falten; el precio adeudado de los enajenados y los frutos no consumidos.

CAPÍTULO IX. Fin de la existencia de la persona humana.

ARTÍCULO 131.- Principio general. La existencia de la persona humana termina por su muerte.

ARTÍCULO 132.- Comprobación de la muerte. La comprobación de la muerte, con finalidad de la ablación de órganos del cadáver, queda sujeta a las disposiciones de la legislación especial.

ARTÍCULO 133.- Conmoriencia. Se presume que mueren al mismo tiempo las personas que perecen en un desastre común o en cualquier otra circunstancia, si no puede determinarse lo contrario.

CAPÍTULO X. Prueba del nacimiento, de la muerte y de la edad.

ARTÍCULO 134.- Medio de prueba. El nacimiento ocurrido en la República, sus circunstancias de tiempo y lugar, el sexo, el nombre y la filiación de las personas nacidas, se prueba con las partidas del Registro Civil.

Del mismo modo se prueba la muerte de las personas fallecidas en la República.

La rectificación de las partidas se hace conforme a lo dispuesto en la legislación especial.

ARTÍCULO 135.- Nacimiento o muerte ocurridos en el extranjero. El nacimiento o muerte ocurridos en el extranjero se prueban con los instrumentos otorgados según las leyes del lugar donde se producen, legalizados o autenticados del modo que disponen las convenciones internacionales a las que adhiere la República.

Los certificados de los asientos practicados en los registros consulares argentinos son suficientes para probar el nacimiento de los hijos de argentinos y para acreditar la muerte de los ciudadanos argentinos.

ARTÍCULO 136.- Falta de registro o invalidez del asiento. Si no hay registro público o falta o es inválido el asiento, el nacimiento y la muerte pueden acreditarse por otros medios de prueba.

Si el cadáver de una persona no es hallado o no puede ser identificado, el tribunal puede tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro, si la desaparición se produjo en circunstancias tales que la muerte debe ser tenida como cierta.

ARTÍCULO 137.- Determinación de la edad. Si no es posible establecer la edad

de las personas por los medios indicados en el presente Capítulo, se la debe determinar judicialmente previo dictamen de peritos.

TÍTULO II. De la persona jurídica.

CAPÍTULO I. Parte general.

SECCIÓN PRIMERA. Personalidad y capacidad.

ARTÍCULO 138.- Definición. Son personas jurídicas todos los entes, distintos de la personas humanas, a los cuales el ordenamiento jurídico les reconoce aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones.

ARTÍCULO 139.- Capacidad. Las personas jurídicas tienen capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, según los fines de su constitución. No tienen otras incapacidades que las resultantes de su naturaleza, o de una disposición legal.

ARTÍCULO 140.- Personalidad. Las personas jurídicas tienen una personalidad distinta de la de sus miembros.

SECCIÓN SEGUNDA. Clasificación.

ARTÍCULO 141.- Clases. Las personas jurídicas son públicas o privadas.

ARTÍCULO 142.- Personas jurídicas públicas. Son personas jurídicas públicas:

- a) El Estado nacional, las provincias, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter.
- b) Los Estados extranjeros y las organizaciones internacionales gubernamentales.
- c) La Iglesia Católica.

ARTÍCULO 143.- Personas jurídicas privadas. Todas las personas jurídicas que no son públicas son privadas.

SECCIÓN TERCERA. Personas jurídicas públicas.

ARTÍCULO 144.- Ley aplicable. Las personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a su reconocimiento, comienzo, funcionamiento, organización y fin de su existencia, por las leyes y ordenamientos de su constitución.

SECCIÓN CUARTA. Personas jurídicas privadas.

PARÁGRAFO 1º. Existencia, autorización estatal, y ley aplicable.

ARTÍCULO 145.- Constitución. Las personas jurídicas se constituyen por voluntad de una sola persona, salvo disposición especial que exija la pluralidad.

ARTÍCULO 146.- Normas aplicables. Las personas jurídicas privadas se rigen:

- a) Por las normas inderogables de la ley especial o de este Código.
- b) Por el acto constitutivo y los reglamentos, prevaleciendo el primero en caso de divergencia.
- c) Por las normas supletorias establecidas por leyes especiales, o, en su defecto,

por las de este Título.

ARTÍCULO 147.- Existencia. La existencia de las personas jurídicas privadas comienza desde su constitución.

ARTÍCULO 148.- Autorización estatal. Las personas jurídicas no necesitan autorización estatal para funcionar, salvo disposición legal en contrario.

En los casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla.

Si se requiere inscripción, la autoridad debe limitarse al examen de los requisitos legales y fiscales.

ARTÍCULO 149.- Control. Las personas jurídicas privadas están sujetas al control estatal dispuesto para cada categoría por este Código o ley especial, de conformidad con las normas de aplicación que rijan en cada jurisdicción. La ley especial nacional puede instituir un control en razón del objeto, o en protección de terceros.

PARÁGRAFO 2º . Atributos y efectos de la personalidad.

ARTÍCULO 150.- Nombre. Las personas jurídicas deben tener un nombre que incluya un aditamento indicativo de la forma jurídica adoptada.

Debe diferir del nombre de las ya existentes. Una vez registrado otorga exclusividad en favor de la persona jurídica y el derecho de oponerse al registro o uso por otra en todo el país, cualquiera sea su clase.

ARTÍCULO 151.- Domicilio. La persona jurídica tiene su domicilio en el lugar de constitución. La dirección de su sede social puede adoptarse en resolución del órgano de administración.

El cambio de domicilio requiere modificación del estatuto. El cambio de sede social, si no forma parte del estatuto, puede ser resuelto por el órgano de administración.

ARTÍCULO 152.- Patrimonio. La persona jurídica debe tener un patrimonio.

ARTÍCULO 153.- Duración. La persona jurídica es perpetua, excepto que la ley o el estatuto disponga lo contrario.

ARTÍCULO 154.- Objeto. El estatuto debe indicar con precisión el objeto de la persona jurídica.

Puede desempeñarse como administrador de otra persona jurídica, de bienes sujetos a tutela o curatela, liquidador, síndico, miembro de la comisión fiscalizadora, revisor de cuentas en una sociedad o asociación, y fiduciario, excepto prohibición legal o estatutaria.

En todos los casos debe designar a la persona humana que la representará en el desempeño de las funciones.

ARTÍCULO 155.- Responsabilidad de los miembros. Los miembros de la

persona jurídica no responden por las obligaciones de ésta, excepto que la ley así lo disponga.

Responden hacia la persona jurídica, por el aporte que hayan comprometido.

PARÁGRAFO 3º . Modificaciones.

ARTÍCULO 156.- Modificaciones del estatuto. Las modificaciones del estatuto deben otorgarse con las mismas formalidades exigidas para éste.

ARTÍCULO 157.- Validez de las modificaciones entre partes y frente a terceros. Las modificaciones del estatuto producen efectos desde su otorgamiento. Si requieren inscripción son oponibles a terceros a partir de ésta, salvo que el tercero las conozca.

PARÁGRAFO 4º . Extinción de la persona jurídica.

ARTÍCULO 158.- Causas de extinción. Termina la existencia de la persona jurídica por:

- a) Decisión de sus miembros, adoptada de conformidad con la ley que la rija, y a sus estatutos.
- b) Cumplimiento de la condición resolutoria a la que está subordinada su existencia.
- c) Consecución del objeto para el cual se formó o por la imposibilidad sobreviniente de lograrlo.
- d) Vencimiento del plazo.
- e) Cualquier otra causa prevista en los estatutos.
- f) Revocación de la autorización estatal para funcionar, la que sólo puede disponerse en caso de haberse abusado o incurrido en transgresión de las condiciones o cláusulas de la respectiva autorización. La revocación debe disponerse por resolución fundada y de acuerdo con el procedimiento reglado que autorice la ley y garantice el derecho de defensa de la persona jurídica. La resolución es apelable por ante el tribunal de alzada con competencia en lo civil que determine la ley local. Durante el trámite del recurso el tribunal puede disponer la suspensión provisional de los efectos de la resolución recurrida.
- g) El agotamiento de los bienes destinados a sostenerla.

ARTÍCULO 159.- Reducción a uno del número de miembros. La persona jurídica no se disuelve por la reducción a uno del número de sus miembros, excepto que la ley especial exija la pluralidad para su existencia, caso en el cual tendrá un plazo de tres (3) meses para incorporar nuevos miembros.

ARTÍCULO 160.- Prórroga. El plazo determinado de duración de las personas jurídicas puede ser prorrogado. Se requiere:

- a) Decisión de sus miembros, adoptada de acuerdo con la previsión legal o

estatutaria.

b) Presentación ante la autoridad de control que corresponda, antes del vencimiento del plazo.

ARTÍCULO 161.- Reconducción. Después de vencido el plazo de duración, o en cualquier supuesto de disolución, la persona jurídica puede ser reconducida. Se requiere:

a) Acuerdo de los miembros, adoptado con mayoría suficiente para resolver la prórroga, y remover el obstáculo en su caso.

b) Que no se hayan agotado los bienes destinados a sostenerla.

Desde la disolución hasta la inscripción o autorización de la reconducción, en su caso, los administradores son solidariamente responsables por los actos realizados que excedan de los propios de la liquidación.

ARTÍCULO 162.- Efectos de la extinción. Subsistencia de la personalidad. Extinguida la persona jurídica, ésta debe liquidarse.

Hasta que concluya la liquidación conserva la personalidad jurídica. Los actos ajenos a la liquidación hacen solidariamente responsables a los liquidadores y a los miembros que hayan intervenido.

PARÁGRAFO 5°. Gobierno y administración.

ARTÍCULO 163.- Disposiciones especiales. El estatuto debe reglamentar la constitución y funcionamiento de los órganos de gobierno y de administración. En ausencia de previsiones especiales rigen las siguientes reglas:

a) Si todos los que deben participar del acto lo consienten, pueden participar en una asamblea o reunión del órgano de gobierno, utilizando medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta debe ser suscripta por el presidente y otro administrador, indicándose la modalidad adoptada, y debiendo guardarse el soporte que corresponda del medio utilizado para comunicarse.

b) Los miembros que deban participar en una asamblea, o los integrantes del consejo, pueden autoconvocarse para deliberar, sin necesidad de citación previa. Las decisiones que se tomen son válidas, si el temario a tratar es aprobado por unanimidad.

c) Los administradores o los integrantes de una persona jurídica pueden renunciar a la citación o aviso de convocatoria a una reunión de consejo, o a una asamblea, o a una citación de cualquier órgano. La sola presencia en la reunión respectiva equivale a una renuncia al aviso o citación.

d) La ley o el estatuto pueden prever cualquier régimen de reunión de integrantes o socios de la persona jurídica, y formas alternativas de aprobación de los estados contables, incluso por correspondencia, soportes magnéticos, o acto entre ausentes.

ARTICULO 164.- Organo de Administración. Oposición que impida adoptar decisiones. Si como consecuencia de la oposición u omisión sistemáticas de algunos administradores, el consejo no puede adoptar decisiones válidas según la regla de la mayoría u otra proporción prevista, los demás administradores en minoría deben dejar constancia en actas y se debe proceder de la siguiente forma:

- a) El presidente, y si éste no actúa, aquella minoría, puede ejecutar los actos conservatorios.
- b) Los actos así ejecutados deben ser puestos en conocimiento de la asamblea ordinaria, que se convoque al efecto, por quien los haya realizado, dentro de los diez (10) días de comenzados los trabajos.
- c) La asamblea puede conferir facultades extraordinarias al presidente o a la minoría, para realizar los actos urgentes o necesarios.
- d) Si en la asamblea no se puede tomar una decisión válida por las mismas razones que impiden hacerlo en el consejo, la persona jurídica queda incurso en causal de disolución. Se aplican las disposiciones del Capítulo I, Sección Cuarta, Parágrafo 4º del presente Título.

CAPÍTULO II. Asociaciones.

SECCIÓN PRIMERA. Asociaciones civiles.

ARTÍCULO 165.- Forma. El acto constitutivo de la asociación civil debe ser otorgado por escritura pública y ser inscripto en el Registro Público. Hasta la inscripción se le aplican las normas de la simple asociación.

ARTÍCULO 166.- Objeto. La asociación civil debe tener un objeto que no sea contrario al interés general y no puede perseguir como fin principal el lucro. Tampoco puede tener por fin el lucro para sus miembros o terceros.

ARTÍCULO 167.- Contenido del acto constitutivo. El acto constitutivo debe contener:

- a) La identificación de los constituyentes.
- b) El nombre con el aditamento "asociación civil".
- c) El objeto.
- d) La composición del patrimonio inicial.
- e) La fijación del plazo de duración, en su caso.
- f) El régimen de la admisión, renuncia y exclusión de los asociados; y las clases o categorías de éstos si se decide que las haya.
- g) Los derechos y obligaciones de los asociados.
- h) El régimen de administración y representación.
- i) El régimen de fiscalización.
- j) Las causales de extinción.

k) El procedimiento de liquidación.

l) El destino de los bienes después de la liquidación.

ARTÍCULO 168.- Administradores. Los integrantes del consejo directivo deben ser asociados.

En el acto constitutivo se debe designar a los integrantes del primer consejo directivo.

ARTÍCULO 169.- Fiscalización. El estatuto puede prever que la designación de los integrantes del órgano de fiscalización recaiga en personas no asociadas. En el acto constitutivo se designa a los integrantes del primer órgano de fiscalización.

ARTÍCULO 170.- Control estatal en razón del objeto. Las asociaciones civiles que por su objeto requieran una autorización del Estado se rigen por las normas de esta Sección.

ARTÍCULO 171.- Participación en los actos de gobierno. El estatuto puede imponer condiciones para que los asociados participen en los actos de gobierno, tales como antigüedad o pago de cuotas sociales. No pueden imponerse condiciones que importen restricción total al ejercicio de los derechos del asociado.

ARTÍCULO 172.- Renuncia o exclusión. Un miembro puede, no obstante cualquier estipulación en contrario, renunciar a la asociación, aun cuando ésta hubiere sido constituida por un período determinado. Debe la contribución prometida o las cotizaciones impagas.

También puede ser excluido por una decisión de sus miembros, adoptada en asamblea extraordinaria. El estatuto debe prever las causales de exclusión, y en su defecto sólo puede ser excluido por causas graves. El socio disconforme con la exclusión puede impugnarla judicialmente en el plazo de seis (6) meses desde la asamblea, o desde que se le notificó lo resuelto si no participó en ella.

El asociado renunciante, excluido, o que de cualquier modo haya cesado de pertenecer a la asociación, no puede repetir las contribuciones efectuadas, ni tiene ningún derecho sobre el patrimonio de la asociación.

ARTÍCULO 173.- Transmisibilidad de la calidad de socio. La calidad de socio no es transmisible, ni por causa de muerte, excepto que las condiciones de transmisibilidad sean previstas en el estatuto.

ARTÍCULO 174.- Remanente. El estatuto no puede contener cláusulas que establezcan que el remanente de los bienes, luego de su liquidación, sea distribuido entre los integrantes.

SECCIÓN SEGUNDA. Simples asociaciones.

ARTÍCULO 175.- Constitución. El acto constitutivo de la simple asociación debe otorgarse por escritura pública, o instrumento privado con fecha cierta y certificación notarial.

ARTÍCULO 176.- Ley supletoria. Se aplican supletoriamente las normas de las

sociedades anónimas en cuanto al gobierno y administración de las asociaciones civiles.

ARTÍCULO 177.- Ley aplicable. Reenvío. Las simples asociaciones se rigen en cuanto a su objeto, acto constitutivo, asociados, administradores, y órgano de fiscalización por lo dispuesto para las asociaciones civiles, con las excepciones contenidas en esta Sección.

ARTÍCULO 178.- Nombre. Al nombre debe agregársele el aditamento "simple asociación", o "asociación simple".

ARTÍCULO 179.- Existencia. La simple asociación comienza su existencia a partir de la fecha del acto constitutivo.

ARTÍCULO 180.- Insolvencia. En caso de insuficiencia de los bienes de la asociación simple, el administrador y todo miembro que administre de hecho los asuntos de la asociación es solidariamente responsable de las obligaciones de la simple asociación que resulten de decisiones que han suscripto durante su administración.

Los bienes personales de cada una de esas personas no pueden ser afectados al pago de las deudas de la asociación, sino después de haber satisfecho a sus acreedores individuales.

ARTÍCULO 181.- Responsabilidad de los miembros. El fundador o asociado que no intervino en la administración de la simple asociación no está obligado por las deudas de ella, sino hasta la concurrencia de la contribución prometida o de las cotizaciones impagas.

ARTÍCULO 182.- Control por el socio. Si se prescinde del órgano de fiscalización, todo miembro, aun excluido de la gestión, no obstante cualquier estipulación en contrario, tiene derecho a informarse sobre el estado de los asuntos de la simple asociación y de consultar sus libros y registros.

Está facultado a ejercerlo de manera que no impida las actividades de la simple asociación y de no entorpecer a los otros miembros el ejercicio de este mismo derecho.

CAPÍTULO III. Fundaciones.

SECCION PRIMERA. Autorización, objeto y patrimonio.

ARTÍCULO 183.- Definición. Las fundaciones son personas jurídicas que se constituyen con una finalidad de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas, destinado a hacer posible sus fines.

ARTÍCULO 184.- Patrimonio inicial. Es requisito para la autorización que el patrimonio inicial posibilite razonablemente el cumplimiento de los fines propuestos; a estos efectos, además de los bienes donados efectivamente en el acto de constitución, se debe considerar su posible complementación por el compromiso de aportes de integración futura, contraído por los fundadores o terceros.

Sin perjuicio de ello, pueden resolverse favorablemente los pedidos de autorización si de los antecedentes de los fundadores o de los funcionarios contratados por la entidad, o por las características del programa a desarrollar, resulta la capacidad potencial del cumplimiento de los objetivos perseguidos.

SECCION SEGUNDA. Constitución y autorización.

ARTÍCULO 185.- Estatuto. Las fundaciones se constituyen por instrumento público, o privado con las firmas certificadas por escribano. Dicho instrumento debe ser otorgado por los fundadores o apoderado con poder especial, si la institución tiene lugar por acto entre vivos, o persona autorizada por el tribunal de la sucesión si es por disposición testamentaria.

El instrumento se presenta ante la autoridad administrativa de control a los efectos de obtener la autorización para funcionar, y debe contener:

a) Los siguientes datos de los fundadores:

I. Si se trata de personas humanas, su nombre, fecha de nacimiento, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad y, en su caso, de los apoderados o autorizados.

II. Si se trata de personas jurídicas, la denominación y el domicilio, acreditándose la existencia de la entidad, su inscripción en el Registro Público de Comercio si es exigible y la representación de quienes comparecen por ella.

En cualquier caso si se invoca mandato debe dejarse constancia del documento que lo prueba.

b) Nombre y domicilio de la fundación.

c) Designación del objeto, que debe ser preciso y determinado.

d) Patrimonio inicial, integración y recursos futuros, lo que debe ser expresado en moneda nacional.

e) Plazo de duración.

f) Organización del consejo de administración, duración de los cargos, régimen de reuniones y procedimiento para la designación de sus miembros;

g) Cláusulas atinentes al funcionamiento de la entidad;

h) Procedimiento y régimen para la reforma del estatuto;

i) Fecha del cierre del ejercicio anual;

j) Cláusulas de disolución y procedimiento atinentes a la liquidación y destino de los bienes.

En el mismo instrumento se deben designar los integrantes del primer consejo de administración y las personas facultadas para gestionar la autorización para funcionar.

ARTÍCULO 186.- Aportes. El dinero en efectivo o los títulos valores que integran el patrimonio inicial deben ser depositados durante el trámite de autorización en el

banco habilitado por la autoridad de control de la jurisdicción en que se constituye la fundación. Los aportes no dinerarios deben constar en un inventario con sus respectivas valuaciones, suscripto por contador público.

ARTÍCULO 187.- Promesas de donación. Las promesas de donación hechas por los fundadores en el acto constitutivo son irrevocables a partir de la resolución de la autoridad administrativa de control que autorice a la entidad para funcionar como persona jurídica. Si el fundador fallece después de firmar el acto constitutivo, las promesas de donación no pueden ser revocadas por sus herederos a partir de la presentación a la autoridad administrativa de control solicitando la autorización para funcionar como persona jurídica.

ARTÍCULO 188.- Cumplimiento de las promesas. La fundación tiene todas las acciones legales para obtener el cumplimiento de promesas de donación, a las que no son oponibles la excepción fundada en el artículo 1429, ni la revocación anterior a la aceptación.

ARTÍCULO 189.- Planes de acción. Con la solicitud de otorgamiento de personería jurídica deben acompañarse los planes que proyecta ejecutar la entidad en el primer trienio, con indicación precisa de la naturaleza, características y desarrollo de las actividades necesarias para su cumplimiento, como también las bases presupuestarias para su realización. Dicha información debe estar suscripta por el o los fundadores, apoderados especiales o persona autorizada por el tribunal de la sucesión del instituyente.

ARTÍCULO 190.- Planes trienales. Cada tres (3) años deben presentarse a la autoridad de control los planes que proyecta ejecutar la entidad en el período trienal subsiguiente, con el mismo contenido y formalidades previstas en el artículo precedente.

SECCION TERCERA. Gobierno y administración.

ARTÍCULO 191.- Consejo de administración. El gobierno y administración de las fundaciones esta a cargo de un consejo de administración, integrado por un mínimo de tres (3) personas. Tiene todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto de la fundación, dentro de las condiciones que establece el estatuto.

ARTÍCULO 192.- Derecho de los fundadores. Los fundadores pueden reservarse por disposición expresa del estatuto la facultad de ocupar cargos en el consejo de administración, como también la designación de los consejeros cuando se produzca el vencimiento de los plazos de designación o vacancia de ellos.

ARTÍCULO 193.- Designación de consejeros. La designación de los integrantes del consejo de administración puede ser conferida a instituciones públicas y a entidades privadas sin fines de lucro.

ARTÍCULO 194.- Carácter de los consejeros. Los miembros del consejo de administración pueden tener carácter de permanentes o temporarios. El estatuto

puede establecer que determinadas decisiones requieran siempre el voto favorable de los primeros, como también que quede reservada a éstos la designación de los segundos.

ARTÍCULO 195.- Reuniones, convocatoria, mayorías, decisiones y actas. El estatuto debe prever el régimen de reuniones ordinarias y extraordinarias del consejo de administración y, en su caso, del comité ejecutivo, y el procedimiento de convocatoria; el quórum será de la mitad más uno de sus integrantes. Debe labrarse en libro especial acta de las deliberaciones de los órganos mencionados, en la que se resuman las manifestaciones hechas en la deliberación, la forma de las votaciones y sus resultados, con expresión completa de las decisiones.

Las decisiones se toman por mayoría absoluta de votos de los presentes, salvo que la ley o el estatuto establezcan mayorías especiales. En caso de empate, el presidente del consejo de administración o del comité ejecutivo tiene doble voto.

ARTÍCULO 196.- Quórum, supuesto especial. Las mayorías establecidas en el artículo anterior no se requieren para la designación de nuevos integrantes del consejo de administración si su concurrencia se torna imposible.

ARTÍCULO 197.- Comité ejecutivo. El estatuto puede prever la delegación de facultades de administración y gobierno en favor de un comité ejecutivo formado por integrantes del consejo de administración. Ejerce sus funciones entre los períodos de reuniones del citado consejo. Igualmente puede delegar facultades ejecutivas en una o más personas, sean éstas miembros del consejo de administración, o no lo sean.

ARTÍCULO 198.- Remoción del consejo de administración. Los miembros del consejo de administración pueden ser removidos con el voto de por lo menos las dos terceras partes de los integrantes del cuerpo. El estatuto puede prever la caducidad automática de los mandatos por ausencias reiteradas y no justificadas a las reuniones del consejo.

ARTÍCULO 199.- Acefalía del consejo de administración. Cuando existen cargos vacantes en el consejo de administración de modo que su funcionamiento se hace imposible y no puede tener lugar la designación de los nuevos miembros conforme al estatuto, o éstos rehusan aceptar los cargos, la autoridad administrativa de control debe proceder a reorganizar la administración de la fundación y a designar sus nuevas autoridades modificando el estatuto en las partes pertinentes.

ARTÍCULO 200.- Derechos y obligaciones de los miembros. Los derechos y obligaciones de los miembros del consejo de administración son regidos por las reglas del mandato, en todo lo que no esté previsto en esta ley, en el estatuto o en las reglamentaciones. En caso de violación de las normas legales o estatutarias, los miembros del consejo de administración se hacen pasibles de la acción por responsabilidad que puede promover la fundación o la autoridad administrativa de control, sin perjuicio de las sanciones de índole administrativa y medidas que esta

última pueda adoptar respecto de la fundación y de los integrantes de dicho consejo.

ARTÍCULO 201.- Carácter honorario del cargo. Los miembros del consejo de administración no pueden recibir retribuciones por el ejercicio de sus cargos.

ARTÍCULO 202.- Contratos con el fundador o sus herederos. Todo contrato entre la fundación y los fundadores o sus herederos, con excepción de las donaciones que éstos hagan a aquélla, como también toda resolución del consejo de administración que directa o indirectamente origine en favor del fundador o sus herederos, un beneficio que no esté previsto en el estatuto, debe ser sometido a la aprobación de la autoridad administrativa de control, y es inválido sin esta aprobación.

ARTÍCULO 203.- Destino de los ingresos. Las fundaciones deben destinar la mayor parte de sus ingresos al cumplimiento de sus fines. La acumulación de fondos únicamente se puede llevar a cabo con objetos precisos como la formación de un capital total suficiente o el cumplimiento de programas futuros de mayor envergadura. En estos casos debe informarse a la autoridad administrativa de control en forma clara y concreta, sobre objetos buscados y posibilidad de su cumplimiento. Asimismo las entidades deben informar de inmediato a la autoridad administrativa de control la realización de gastos que importen apreciable disminución de su patrimonio.

SECCION CUARTA. Información y control.

ARTÍCULO 204.- Deber de información. Las fundaciones deben proporcionar a la autoridad administrativa de control de su jurisdicción toda la información que ella requiera.

ARTÍCULO 205.- Colaboración de las reparticiones oficiales. Las reparticiones oficiales deben suministrar directamente a la autoridad administrativa de control la información y asesoramiento que ésta les requiera para una mejor apreciación de los programas proyectados por las fundaciones.

SECCION QUINTA. Reforma del estatuto y disolución.

ARTÍCULO 206.- Mayoría necesaria. Cambio de objeto. Salvo disposición contraria del estatuto, sus reformas requieren por lo menos el voto favorable de la mayoría de los miembros del consejo de administración y de los dos tercios en los supuestos de modificación del objeto, fusión con entidades similares y disolución. La modificación del objeto sólo procede cuando el establecido por el fundador llega a ser de cumplimiento imposible.

ARTÍCULO 207.- Destino de los bienes. En caso de disolución, el remanente de los bienes debe destinarse a una entidad de carácter público o a una persona jurídica de carácter privado de bien común, sin fines de lucro y domiciliada en la República, salvo si se trata de fundaciones extranjeras.

Las decisiones sobre el traspaso del remanente de los bienes requieren la

previa aprobación de la autoridad administrativa de control.

ARTÍCULO 208.- Revocación de las donaciones. La reforma del estatuto o la disolución y traspaso de bienes de la fundación, motivada por cambios en las circunstancias que hayan tornado imposible el cumplimiento de su objeto en la forma prevista al tiempo de su creación, y aprobada por la autoridad administrativa de control, no da lugar a la acción de revocación de las donaciones por los donantes o sus herederos, a menos que en el acto de tales donaciones se haya establecido expresamente como condición esencial la modalidad de cumplimiento que posteriormente se tornó imposible.

SECCION SEXTA. Fundaciones por disposición testamentaria.

ARTÍCULO 209.- Intervención del Ministerio Público. Si el testador dispone de bienes con destino a la creación de una fundación, incumbe al Ministerio Público asegurar la efectividad de su propósito, coadyuvantemente con los herederos y el albacea testamentario.

ARTÍCULO 210.- Facultades del tribunal. Si los herederos no se ponen de acuerdo entre sí o con el albacea en la redacción del estatuto y acta constitutiva, las diferencias deben ser resueltas por el tribunal de la sucesión, previa vista al Ministerio Público y a la autoridad administrativa de control.

SECCION SÉPTIMA. Autoridad de control.

ARTÍCULO 211.- Atribuciones. La autoridad administrativa de control aprueba los estatutos de la fundación y su reforma; fiscaliza el funcionamiento de la misma y el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias a que se halla sujeta, incluso la disolución y liquidación.

ARTÍCULO 212.- Otras facultades. Además de las atribuciones señaladas en otras disposiciones de esta ley, corresponde a la autoridad administrativa de control:

- a) Solicitar de las autoridades judiciales la designación de administradores interinos de las fundaciones si no llenan las vacantes de sus órganos de gobierno en perjuicio del desenvolvimiento normal de la entidad o carecen temporariamente de tales órganos.
- b) Suspender en caso de urgencia el cumplimiento de las deliberaciones o resoluciones contrarias a las leyes o los estatutos, y solicitar de las autoridades judiciales la nulidad de esos actos.
- c) Solicitar de las mismas autoridades la suspensión o remoción de los administradores de la fundación que hayan violado los deberes de su cargo, y la designación de administradores provisorios.
- d) Convocar al consejo de administración a petición de alguno de sus miembros, o cuando haya comprobado irregularidades graves.

ARTÍCULO 213.- Recursos. Las decisiones administrativas que denieguen la autorización para la constitución de la fundación o retiren la personería jurídica

acordada pueden recurrirse judicialmente en los casos de ilegitimidad y arbitrariedad.

Igual recurso cabe si se trata de fundación extranjera y se deniega la aprobación requerida por ella, o ésta es revocada.

El recurso se sustancia con arreglo al trámite más breve que rijan por ante el tribunal de apelación con competencia en lo civil, del domicilio de la fundación. Los órganos de la fundación pueden deducir igual recurso contra las resoluciones que dicte la autoridad administrativa de control en la situación prevista en el artículo 212, inciso b).

TÍTULO III. Del patrimonio.

CAPÍTULO I. Activo del patrimonio.

SECCIÓN PRIMERA. Bienes y cosas considerados en sí mismos y con relación a los derechos.

ARTÍCULO 214.- Bienes y cosas. Se denominan bienes los objetos susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre.

ARTÍCULO 215.- Bienes registrables. Son bienes registrables los que deben ser inscriptos en registros especiales para la oponibilidad o la constitución de los derechos.

ARTÍCULO 216.- Inmuebles por su naturaleza. Son inmuebles por su naturaleza el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre.

ARTÍCULO 217.- Inmuebles por accesión. Son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con carácter perdurable. En este caso, los muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario.

No se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad del propietario.

ARTÍCULO 218.- Cosas muebles. Son cosas muebles las que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa.

ARTÍCULO 219.- Cosas divisibles. Son cosas divisibles las que pueden ser divididas en porciones reales sin ser destruidas, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a la cosa misma.

Las cosas no pueden ser divididas si su fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y aprovechamiento. En materia de inmuebles, la reglamentación del fraccionamiento corresponde a las autoridades locales.

ARTÍCULO 220.- Cosas principales. Son cosas principales las que pueden existir por sí mismas.

ARTÍCULO 221.- Cosas accesorias. Son cosas accesorias aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa de la cual dependen o a la cual están adheridas. Su régimen jurídico es el de la cosa principal, salvo disposición legal en contrario.

Si las cosas muebles se adhieren entre sí para formar un todo sin que sea posible distinguir la accesoria de la principal, es principal la de mayor valor. Si son del mismo valor no hay cosa principal ni accesoria.

ARTÍCULO 222.- Cosas consumibles. Son cosas consumibles aquellas cuya existencia termina con el primer uso y las que terminan para quien deja de poseerlas por no distinguirse en su individualidad. Son cosas no consumibles las que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace, aunque sean susceptibles de consumirse o deteriorarse después de algún tiempo.

ARTÍCULO 223.- Cosas fungibles. Son cosas fungibles aquellas en las que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie, y que pueden sustituirse por otras de la misma calidad y en igual cantidad.

ARTÍCULO 224.- Frutos y productos. Son frutos los provechos renovables que produce un bien sin que se altere o disminuya su sustancia.

Son frutos naturales los que provienen de la cosa, sin intervención humana; frutos industriales los que produce la cosa con la intervención humana y frutos civiles los que el bien produce como consecuencia de un derecho. Las remuneraciones del trabajo se asimilan a los frutos civiles.

Productos son los objetos no renovables que separados o sacados de la cosa alteran o disminuyen su sustancia.

Los frutos naturales e industriales y los productos forman un todo con la cosa, si no son separados.

ARTÍCULO 225.- Bienes fuera del comercio. Están fuera del comercio los bienes cuya transferencia está expresamente prohibida:

- a) Por la ley.
- b) Por actos jurídicos, en cuanto este Código permite tales prohibiciones.

SECCIÓN SEGUNDA. Cosas consideradas en relación a las personas.

ARTÍCULO 226.- Dominio público. Son cosas del dominio público, salvo lo dispuesto por leyes especiales:

- a) El mar territorial hasta la distancia que determinen los tratados internacionales y la legislación especial, sin perjuicio del poder jurisdiccional sobre la zona contigua. Entiéndese por mar territorial el agua, la playa marítima, el lecho marino y su subsuelo.
- b) Las bahías, ensenadas, puertos y ancladeros.
- c) Los ríos y demás aguas que corren por cauces naturales, los lagos navegables y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés

general, comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a las disposiciones locales. Entiéndese por río el agua, las playas y el lecho por donde corre el agua. Considérase lago el agua, sus playas y su lecho.

d) Las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida u organizada para utilidad o comodidad común y afectada al uso público.

e) Los documentos oficiales del Estado.

f) Las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico.

ARTÍCULO 227.- Bienes del dominio privado del Estado. Salvo lo dispuesto por leyes especiales, pertenecen al Estado nacional, provincial o municipios:

a) Los inmuebles, incluidas las islas, que carecen de dueño y están situados dentro de los límites de la República.

b) Los lagos no navegables que carecen de dueño.

c) Las cosas muebles de dueño desconocido que no sean abandonadas, salvo los tesoros.

d) Los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipios por cualquier título.

ARTÍCULO 228.- Determinación y caracteres de las cosas del Estado. Uso y goce. Las cosas públicas del Estado son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Las personas tienen su uso y goce, sujeto a las disposiciones locales.

La Constitución Nacional, la legislación federal y el derecho público local determinan el carácter nacional, provincial o municipal de los bienes enumerados en los dos (2) artículos precedentes.

ARTÍCULO 229.- Bienes de los particulares. Los bienes que no son del Estado nacional, provincial o municipios, son bienes de los particulares sin distinción de las personas que tengan derecho sobre ellos.

ARTÍCULO 230.- Aguas de los particulares. Las aguas que surgen en los terrenos de particulares pertenecen a sus dueños, quienes pueden usar libremente de ellas y cambiar su dirección natural. El hecho de correr por los terrenos inferiores no da a los dueños de estos derecho alguno. Pertenecen al dominio público si constituyen cursos de agua por cauces naturales y no pueden ser alterados.

CAPÍTULO II. Función de garantía.

ARTÍCULO 231.- Garantía común. Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este Código o las leyes especiales

declaran inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la ley sólo tienen por garantía los bienes que forman parte de ese patrimonio particular.

ARTÍCULO 232.- Bienes afectados directamente a un servicio público. Si se trata de los bienes de los particulares afectados directamente a la prestación de un servicio público, el poder de agresión de los acreedores no puede perjudicar la prestación del servicio.

CAPÍTULO III. Vivienda.

ARTÍCULO 233.- Alcance. Puede afectarse al régimen previsto en este Capítulo, a un inmueble destinado a vivienda, por su totalidad o hasta una parte de su valor. Esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales.

ARTÍCULO 234.- Oponibilidad. La afectación produce efectos a partir de su inscripción en el registro de la propiedad inmueble que corresponda, la que debe hacerse de acuerdo a las reglamentaciones locales.

ARTÍCULO 235.- Legitimados. La afectación puede ser rogada por el titular registral; si los titulares son varios deben solicitarla unánimemente.

La afectación puede disponerse por actos de última voluntad; en tal caso, el tribunal debe disponer la inscripción a pedido de cualquiera de los beneficiarios, o del Ministerio Público o de oficio si hay beneficiarios incapaces.

ARTÍCULO 236.- Beneficiarios. Son beneficiarios de la afectación, el propietario constituyente, su cónyuge, sus ascendientes o descendientes por naturaleza o por adopción; y en defecto de ellos pueden serlo sus parientes colaterales, hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad, que convivan con el constituyente.

ARTÍCULO 237.- Habitación efectiva. Para hacer la afectación deben habitar el inmueble alguno de los constituyentes y todos los beneficiarios; y para que sus efectos subsistan frente a terceros, si los beneficiarios son varios, basta con que lo haga uno de ellos.

ARTÍCULO 238.- Subrogación real. La afectación se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada, o a los importes que la sustituyen en concepto de indemnización.

ARTÍCULO 239.- Efecto principal de la afectación. La vivienda afectada no es susceptible de ejecución por deudas posteriores a su inscripción. Sólo se puede requerir su ejecución por:

- a) Obligaciones del titular anteriores a la inscripción.
- b) Impuestos, tasas o contribuciones que graven directamente al inmueble, y expensas comunes.
- c) Obligaciones con garantía real sobre el inmueble constituidas de conformidad a lo previsto en el artículo siguiente.
- d) Obligaciones causadas en construcciones u otras mejoras realizadas en la

vivienda.

e) Obligaciones alimentarias a cargo del titular.

Si hay concurso, la ejecución de la vivienda puede ser solicitada y beneficia exclusivamente a los acreedores enumerados en este artículo. El remanente de la ejecución se entrega al propietario.

ARTÍCULO 240.- Transmisión de la vivienda afectada. El inmueble no puede ser objeto de legados o mejoras testamentarias. Si el constituyente está casado, no puede ser transmitido ni gravado sin la conformidad del cónyuge; si éste se opone, falta o es incapaz, la transmisión o gravamen deben ser autorizados judicialmente.

ARTÍCULO 241.- Frutos. Son embargables y ejecutables los frutos que produce el inmueble si no son indispensables para satisfacer las necesidades de los beneficiarios.

ARTÍCULO 242.- Créditos fiscales. La vivienda afectada está exenta del impuesto a la transmisión gratuita por causa de muerte en todo el territorio de la Nación, si ella se opera a favor de las personas mencionadas en el artículo 235, y no es desafectada en los cinco (5) años posteriores a la transmisión.

Los trámites y actos vinculados a la constitución e inscripción de la afectación, están exentos de impuestos y tasas.

ARTÍCULO 243.- Deberes de la autoridad de aplicación. La autoridad administrativa debe prestar gratuitamente a los interesados el asesoramiento y la colaboración necesarios para la realización de los trámites relacionados con la constitución, inscripción y cancelación de esta afectación.

ARTÍCULO 244.- Honorarios. Si a solicitud de los interesados, en los trámites de constitución intervienen profesionales, sus honorarios no pueden exceder en conjunto del uno (1) por ciento de la valuación fiscal.

En los juicios referentes a la transmisión hereditaria de la vivienda afectada y en los concursos, los honorarios no pueden exceder del tres (3) por ciento de la valuación fiscal.

ARTÍCULO 245.- Desafectación y cancelación de la inscripción. La desafectación y la cancelación de la inscripción proceden:

a) A solicitud del constituyente; si está casado se requiere el asentimiento del cónyuge; si éste se opone, falta o es incapaz, la desafectación debe ser autorizada judicialmente.

b) A solicitud de la mayoría de los herederos, si la constitución se dispuso por acto de última voluntad, salvo que medie disconformidad del cónyuge supérstite o existan incapaces, caso en el cual el tribunal de la sucesión debe resolver lo que sea más conveniente para el interés de los beneficiarios.

c) A requerimiento de la mayoría de los copartícipes, si hay condominio, computada en proporción a sus respectivas alícuotas.

d) A instancia de cualquier interesado si no subsisten los recaudos previstos en este Capítulo, o fallecen el constituyente y todos los beneficiarios.

e) En caso de expropiación, reivindicación o ejecución autorizada por este Capítulo.

ARTÍCULO 246.- Inmueble rural. Las disposiciones de este Capítulo son aplicables al inmueble rural que no exceda de la unidad económica, de acuerdo con lo que establezcan las reglamentaciones locales.

TÍTULO IV. De los hechos y actos jurídicos.

CAPÍTULO I. Hechos jurídicos.

ARTÍCULO 247.- Hechos jurídicos. Son hechos jurídicos los acontecimientos que producen una adquisición, modificación o extinción de derechos.

Se juzgan voluntarios los actos ejecutados con discernimiento, intención y libertad.

Los actos lícitos que no tienen por fin inmediato adquirir, modificar o extinguir derechos sólo producen los efectos que la ley les atribuye.

ARTÍCULO 248.- Actos involuntarios. Son involuntarios por falta de discernimiento los actos de los dementes interdictos y los de quienes, al momento de ejecutarlos, están privados de razón.

Los menores tienen discernimiento para los actos ilícitos desde la edad de diez (10) años, y para los actos lícitos desde la edad de catorce (14) años. Sin embargo, conforme a las circunstancias personales del sujeto, el tribunal puede considerar con discernimiento para los actos lícitos aun a quien tiene menos de catorce (14) años.

ARTÍCULO 249.- Manifestación de la voluntad. La voluntad puede exteriorizarse oralmente, por escrito, por la ejecución de un hecho material comenzado o consumado, o por cualquier otro modo directo. La expresión tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre, pero no es eficaz cuando la ley o la convención exigen una manifestación expresa.

El silencio puede ser juzgado como asentimiento a un acto o a una interrogación cuando existe deber de expedirse, el que puede resultar de la voluntad de las partes, de los usos del tráfico o de las relaciones anteriores de aquéllas.

CAPÍTULO II. Actos jurídicos.

SECCIÓN PRIMERA. Disposiciones generales.

ARTÍCULO 250.- Definición. Son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos que tienen por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, trátase de adquirir, modificar o extinguir derechos.

SECCION SEGUNDA. Objeto de los actos jurídicos.

ARTÍCULO 251.- Objetos prohibidos. No pueden ser objeto de los actos jurídicos

los hechos que son imposibles o están prohibidos por las leyes, son contrarios a la moral, al orden público o lesivos de los derechos ajenos; ni los bienes que por un motivo especial se prohíbe que lo sean.

ARTÍCULO 252.- Convalidación. El acto jurídico sujeto a plazo o condición suspensivos es válido si el objeto inicialmente imposible, se hace posible antes del vencimiento del plazo o del cumplimiento de la condición.

SECCIÓN TERCERA. Causa de los actos jurídicos.

ARTÍCULO 253.- Necesidad de causa lícita. Todo acto jurídico debe procurar fines lícitos en atención a las circunstancias existentes al tiempo de su celebración y ejecución.

ARTÍCULO 254.- Presunción de causa. Se presume que el acto jurídico tiene causa, aunque ella no esté expresada, y que ella es lícita. La prueba en contrario está a cargo de quien sostiene su inexistencia o ilicitud.

ARTÍCULO 255.- Falsa causa. Es inválido el acto jurídico en el cual la causa expresada resulta falsa, salvo que el interesado pruebe que se funda en otra causa verdadera siempre que ésta sea lícita.

ARTÍCULO 256.- Causa ilícita. Es inválido el acto otorgado por una finalidad que contraría prohibiciones de la ley, se opone al orden público, la moral o afecta derechos de terceros, aun cuando los otorgantes lo disimulen bajo la apariencia de una causa lícita.

ARTÍCULO 257.- Motivos personales. Los motivos personales de los otorgantes del acto jurídico serán relevantes cuando integren expresa o implícitamente la declaración de voluntad común.

ARTÍCULO 258.- Actos abstractos. La inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa no es discutible cuando se trata de actos abstractos, mientras el obligado no haya cumplido sus obligaciones, salvo disposiciones especiales.

ARTÍCULO 259.- Frustración de la causa. La causa debe existir en la formación del acto jurídico y durante su celebración, y subsistir durante su ejercicio.

La alteración sustancial de las circunstancias que existían al tiempo de la celebración priva de causa al acto que haya sido otorgado en miras a la satisfacción de un interés que presupone ostensiblemente la subsistencia de esas circunstancias al tiempo del cumplimiento o ejecución.

La inexistencia de causa da lugar a la invalidez del acto. Su insubsistencia o frustración, a la extinción o adecuación; si el acto es un contrato se aplican los artículos 1059 y 1060.

CAPÍTULO III. Forma y prueba de los actos jurídicos.

SECCIÓN PRIMERA. Disposiciones generales.

ARTÍCULO 260.- Libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada para un acto jurídico, las partes pueden usar las formas que juzguen convenientes

ARTÍCULO 261.- Forma impuesta. Sanción. Si la ley impone una forma para la validez del acto éste es inválido si la forma exigida no ha sido satisfecha.

Si la ley no impone una forma determinada, ésta constituye sólo un medio de prueba del otorgamiento del acto.

ARTÍCULO 262.- Forma convenida. Si las partes convienen por escrito la forma a que han de sujetar la conclusión de un acto jurídico futuro, entiéndese que sólo quedarán vinculadas por la forma convenida.

ARTÍCULO 263.- Expresión escrita. La expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos o por instrumentos particulares firmados o no firmados, salvo los casos en que determinada forma de instrumento sea exclusivamente impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte siempre que su contenido pueda ser representado como texto inteligible aunque para su lectura se requiera la intervención de medios técnicos.

ARTÍCULO 264.- Instrumentos particulares. Son instrumentos particulares, si no están firmados, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información, y en general todo escrito no firmado.

ARTÍCULO 265.- Instrumentos privados. Son instrumentos privados los instrumentos particulares firmados.

ARTÍCULO 266.- Firma. La firma prueba la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe ser manuscrita y consistir en el nombre del firmante, o en un signo, escritos del modo en que habitualmente lo hace a tal efecto.

En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza un método para identificarla; y ese método asegura razonablemente la autoría e inalterabilidad del instrumento.

SECCIÓN SEGUNDA. Instrumentos públicos.

ARTÍCULO 267.- Enunciación. Son instrumentos públicos:

- a) Las escrituras públicas y sus testimonios.
- b) Los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos en la forma que establecen las leyes
- c) Los títulos emitidos por el Estado nacional o provincial conforme a las leyes que autorizan su emisión.

ARTÍCULO 268.- Requisitos. Son recaudos de validez del instrumento público:

- a) Que el oficial público actúe en los límites de sus atribuciones y de su competencia territorial, salvo que el lugar fuese generalmente tenido como comprendido en ella.
- b) Que lleve las firmas del oficial público y de todos los comparecientes; si alguno de ellos no firma, ni lo hace otro a su ruego, el instrumento carece de validez para

todos.

- c) Que en el instrumento no sea parte, por sí o en representación de un tercero, el oficial público, su cónyuge o un pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
- d) Que el oficial público se encuentre efectivamente en funciones; sin embargo, son válidos los instrumentos autorizados por él antes de la notificación de la cesación de sus funciones hecha conforme a la ley o reglamento que regule la función de que se trate. La falta en la persona del oficial público, de las cualidades o condiciones necesarias para su nombramiento como tal, no afecta al instrumento
- e) Que el instrumento conste en el soporte exigido por la ley o las reglamentaciones. Los instrumentos generados por medios electrónicos deben asegurar la autenticidad, integridad e inalterabilidad del contenido del instrumento y la identificación del oficial público.

Los instrumentos públicos extendidos de acuerdo con lo que establece este Código gozan de entera fe y producen idénticos efectos en todo el territorio de la República, cualquiera sea la jurisdicción donde se hayan otorgado.

ARTÍCULO 269.- Validez como instrumento privado. El instrumento que no reúne los recaudos del artículo precedente, vale como instrumento privado si lo han firmado los comparecientes

ARTÍCULO 270.- Defectos del instrumento. Carece de validez el instrumento público que tenga enmiendas, agregados, borraduras, entrelíneas y alteraciones en partes esenciales, si no están salvadas antes de las firmas requeridas

ARTÍCULO 271.- Testigos inhábiles. No pueden ser testigos en instrumentos públicos:

- a) Los incapaces de ejercicio.
- b) Los ciegos.
- c) Los que no saben firmar.
- d) Los dependientes del oficial público.
- e) El cónyuge y los parientes del oficial público, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
- f) Los fallidos no rehabilitados.
- g) Los inhabilitados por sentencia para ser testigos en instrumentos públicos.

El error común sobre la idoneidad de los testigos salva la eficacia de los instrumentos en que han intervenido.

ARTÍCULO 272.- Eficacia probatoria. El instrumento público hace plena fe:

- a) Hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal, en cuanto a que se ha realizado el acto y respecto de la fecha, del lugar y de los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él o pasados en su presencia.

b) Hasta prueba en contrario, respecto de las convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y demás declaraciones contenidos en él, así como de las enunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado.

ARTÍCULO 273.- Incolumidad formal. Los testigos de un instrumento público y el oficial público que lo autorizó no pueden contradecir, variar ni alterar su contenido, si no alegan que testificaron u otorgaron el acto por ser víctimas de dolo o violencia

ARTÍCULO 274.- Contradocumento. El instrumento particular que altera lo expresado en un instrumento público puede invocarse entre las partes, pero es inoponible frente a terceros.

SECCIÓN TERCERA. Escrituras públicas y actas.

ARTÍCULO 275.- Definición. Las escrituras públicas son los instrumentos matrices extendidos en el protocolo de los escribanos públicos o de otros funcionarios autorizados para ejercer las mismas funciones, que contienen uno o más actos jurídicos.

Los testimonios de las escrituras públicas que expiden los escribanos son instrumentos públicos y hacen plena fe como la escritura matriz. Si hay alguna variación entre ésta y los testimonios, se debe estar al contenido de la escritura matriz.

Si un acto es otorgado en un territorio para producir efectos en otro, las leyes locales no pueden imponer cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar de cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario interviniente.

ARTÍCULO 276.- Protocolo. El protocolo se forma con los folios habilitados para el uso de cada registro, numerados correlativamente en cada año calendario, y con los documentos que se incorporan por exigencia legal o a requerimiento de las partes del acto.

Corresponde a la ley local reglamentar lo relativo a las características de los folios, su expedición, así como los recaudos relativos a la formación del protocolo, forma y modo de su colección en volúmenes o legajos, su conservación y archivo.

ARTÍCULO 277.- Requisitos. El escribano debe recibir por sí mismo las declaraciones de los comparecientes. Las escrituras públicas, que deben extenderse en un único acto, pueden ser manuscritas o mecanografiadas, pudiendo utilizarse mecanismos electrónicos de procesamiento de textos, siempre que en definitiva el texto resulte estampado en el soporte exigido por las reglamentaciones, con caracteres fácilmente legibles.

En los casos de pluralidad de otorgantes en los que no haya entrega de dinero, títulos valores o cosas en presencia del escribano, los interesados pueden suscribir la escritura en distintas horas del mismo día de su otorgamiento, dejándose constancia de ello en el protocolo. Este procedimiento puede usarse

siempre que no se modifique el texto definitivo después de la primera firma.

ARTÍCULO 278.- Idioma. La escritura pública debe hacerse en idioma nacional. Si alguno de los otorgantes declarase ignorarlo, la escritura debe redactarse conforme a una minuta firmada por él, la que será vertida al idioma nacional por traductor público y, si no lo hay, por el mismo notario si conoce el idioma o por intérprete que él acepte. Ambos instrumentos deben quedar agregados al protocolo.

ARTÍCULO 279.- Idioma extranjero. Los otorgantes pueden requerir al escribano que se agregue al protocolo un instrumento original en idioma extranjero. En ese caso, con el testimonio de la escritura el escribano debe entregar copia certificada de ese instrumento en el idioma en que está redactado.

ARTÍCULO 280.- Abreviaturas y números. No se deben utilizar abreviaturas. Pueden usarse números, salvo para las cantidades que se entreguen en presencia del escribano y otras cantidades o datos que correspondan a elementos esenciales del acto jurídico.

ARTÍCULO 281.- Otorgante sordo o mudo. Si alguna de las personas otorgantes del acto es sorda, debe leer por sí misma la escritura y el escribano debe dejar constancia antes de la firma de esa lectura y de la conformidad con el contenido de aquélla.

Si alguna de las personas otorgantes del acto es muda, la escritura debe hacerse de conformidad a una minuta firmada por ella y el escribano debe dar fe de ese hecho. La minuta debe quedar protocolizada.

ARTÍCULO 282.- Contenido. La escritura debe contener:

- a) El lugar y fecha de su otorgamiento; si cualquiera de las partes lo requiere o el escribano lo considera conveniente, la hora en que se firma el instrumento.
- b) Los nombres, apellido, fecha de nacimiento y estado de familia de los otorgantes. Si se trata de personas humanas casadas, se debe consignar también si lo son en primeras o posteriores nupcias y el nombre del cónyuge, si resulta relevante en atención a la naturaleza del acto. Si el otorgante es una persona jurídica, se debe dejar constancia de su denominación completa, domicilio y datos de inscripción de su constitución si corresponde.
- c) La naturaleza del acto y la individualización de los bienes que constituyen su objeto.
- d) La constancia de la lectura que el escribano debe hacer en presencia de los otorgantes.
- e) La salvedad, de puño y letra del escribano, inserta antes de las firmas, de todo lo escrito entre líneas, enmiendas, borraduras, agregados y alteraciones que se hayan hecho en partes esenciales.
- f) La firma de los otorgantes y del escribano. Si alguno de los otorgantes no sabe o no puede firmar, debe hacerlo en su nombre otra persona, en presencia del

escribano, haciéndose constar la causa del impedimento, el nombre, domicilio y número de documento de identidad del firmante a ruego como los de un compareciente más, y asentarse la impresión digital del otorgante cuya firma resulte omitida, si ello es posible.

ARTÍCULO 283.- Justificación de identidad. Si el escribano no conoce a los otorgantes, éstos deben justificar su identidad mediante la exhibición de un documento que sea hábil para ello, o por la declaración de dos (2) testigos de conocimiento del escribano. En la escritura debe constar el número de documento exhibido, o el nombre, documento de identidad y domicilio de los testigos, asentarse la impresión digital del otorgante no conocido por el escribano, y agregarse al protocolo fotocopias de los documentos del otorgante y de los testigos, certificadas por el escribano.

ARTÍCULO 284.- Documentos habilitantes. Si el otorgante de la escritura es un representante, el escribano debe exigir la presentación de documento original que lo acredite, el que ha de quedar agregado al protocolo, salvo que se trate de poderes para más de un asunto o de otros documentos habilitantes que hagan necesaria la devolución, supuesto en el cual se debe agregar copia certificada por el escribano. En caso de que los documentos habilitantes ya estén protocolizados en el registro del escribano interviniente, basta con que se mencione esta circunstancia, indicando folio y año.

ARTÍCULO 285.- Testimonios. El escribano debe dar testimonio de la escritura a las partes. El testimonio puede ser obtenido por cualquier medio de reproducción que asegure su permanencia indeleble, conforme a las reglamentaciones locales

Si alguna de las partes solicita nuevo testimonio, el escribano debe entregarlo, salvo que la escritura contenga la constancia de alguna obligación pendiente de dar o de hacer, a cargo de otra de las partes. En este caso, se debe requerir la acreditación en instrumento público de la extinción de la obligación o autorización judicial, que debe tramitar con citación de las partes del acto jurídico.

ARTÍCULO 286.- Invalidez. Son inválidas las escrituras si:

- a) Omiten la indicación del lugar y fecha en que fueron otorgadas y autorizadas; o el nombre de los otorgantes y de los comparecientes.
- b) Falta la firma y el sello del escribano o la firma de alguno de los comparecientes.
- c) No se halla en el folio del protocolo donde según el orden cronológico debe obrar.

La inobservancia de otros recaudos formales no invalida la escritura, sin perjuicio de las responsabilidades que pueden ser atribuidas al escribano.

ARTÍCULO 287.- Actas. Se denominan actas los documentos notariales que tienen por objeto la comprobación de hechos.

Están sujetos a los mismos requisitos que las escrituras públicas, con las siguientes modificaciones:

- a) Se hace constar el requerimiento hecho al escribano.
- b) No es necesaria la comprobación de la representación invocada por el requirente.
- c) La diligencia puede practicarse sin necesidad de la presencia del requirente.
- d) La persona con quien se practique la diligencia debe ser informada durante la diligencia del carácter en que interviene el escribano público y, en su caso, del derecho de contestar o no hacerlo
- e) Puede prescindirse de toda certeza sobre el conocimiento de la identidad de las personas con quienes se entienda la diligencia.
- f) No se requiere unidad del acto ni de contexto. Pueden extenderse coetáneamente o con posterioridad a los hechos que se narren y separarse en dos (2) o más partes o diligencias, siguiendo el orden cronológico.
- g) Debe pedirse la conformidad de los intervinientes con el texto, y pueden autorizarse aunque alguno de los interesados rehúse firmar, de lo que debe dejarse constancia.

ARTÍCULO 288.- Valor probatorio. Sólo las actas protocolares tienen el valor probatorio de los instrumentos públicos.

SECCIÓN CUARTA. Instrumentos particulares y privados.

ARTÍCULO 289.- Instrumentos privados. Requisito. El único requisito de validez de los instrumentos privados es la firma del o de los otorgantes.

ARTÍCULO 290.- Reconocimiento de la firma. Todo aquel contra quien se presente un instrumento cuya firma se le atribuye, debe manifestar si ésta le pertenece. Los herederos pueden limitarse a manifestar que ignoran si la firma es o no de su causante. La autenticidad de la firma puede ser probada por cualquier medio.

ARTÍCULO 291.- Documento firmado en blanco. El firmante de un documento en blanco puede impugnar su contenido mediante la prueba de que no responde a sus instrucciones, pero no puede valerse de testigos si no existe principio de prueba por escrito. El desconocimiento del firmante no afecta a los terceros de buena fe.

Si el documento firmado en blanco fue sustraído y llenado contra la voluntad del firmante, esas circunstancias pueden probarse por cualquier medio. En tal caso, el contenido del instrumento no puede oponerse al firmante, aunque los terceros sean de buena fe y hayan adquirido derechos a título oneroso.

ARTÍCULO 292.- Extensión del reconocimiento. El reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento privado. El instrumento privado reconocido, o declarado auténtico por sentencia, o cuya firma está certificada por escribano, tiene la misma eficacia probatoria que el instrumento público respecto de los firmantes y sus herederos. La prueba resultante es indivisible.

El documento signado con la impresión digital vale como principio de prueba por escrito. Puede ser impugnado en su contenido en los términos del artículo precedente.

ARTÍCULO 293.- Enmiendas. Las raspaduras, enmiendas o entrelíneas que afecten partes esenciales del acto instrumentado deben ser salvadas con la firma de las partes. De no hacerse así, el tribunal determinará en qué medida el defecto excluye o reduce la fuerza probatoria del instrumento.

ARTÍCULO 294.- Fecha cierta. La eficacia probatoria de los instrumentos privados reconocidos se extiende a los terceros desde que adquieren fecha cierta. Adquieren fecha cierta el día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado después. La prueba puede producirse por cualquier medio, y debe ser apreciada rigurosamente por el tribunal.

ARTÍCULO 295.- Correspondencia. La correspondencia, cualquiera sea el medio empleado para crearla o transmitirla, puede presentarse como prueba por el destinatario, pero la que es confidencial no puede ser utilizada sin consentimiento del remitente. Los terceros no pueden valerse de la correspondencia sin asentimiento del destinatario, y del remitente si es confidencial.

La correspondencia dirigida a terceros no constituye prueba suficiente de las obligaciones a que se refiere.

Están comprendidos en la disposición de este artículo los instrumentos electrónicos aunque por el modo de transmisión queden archivados en poder de un tercero.

ARTÍCULO 296.- Instrumentos particulares. El valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el tribunal ponderando, entre otras pautas, los usos del tráfico, las relaciones precedentes de las partes si las hubiere habido, y la razonable convicción que pueda alcanzarse sobre su autoría, legibilidad e inalterabilidad de acuerdo a los métodos utilizados para su creación y transmisión a terceros.

SECCION QUINTA. Registro Público de Actividades Especiales.

ARTÍCULO 297.- Registro. Carácter. En cada una de jurisdicciones debe funcionar uno o más Registros Públicos de Actividades Especiales.

Las leyes y reglamentos de cada jurisdicción regulan su organización y funcionamiento, así como el procedimiento de registración y el de los recursos, de conformidad con las previsiones de este Código.

ARTÍCULO 298.- Situaciones jurídicas registrables. En el Registro Público de Actividades Especiales deben inscribirse o anotarse, para su publicidad, oponibilidad a terceros, en su caso, y demás efectos legales:

a) Los instrumentos que importen la registración de una persona jurídica a los fines del artículo 302, o como martillero, corredor u otra actividad que según la ley

corresponda y sus modificaciones y cancelaciones;

b) Los contratos constitutivos de sociedades y todo otro instrumento que los modifique o complemente; los instrumentos correspondientes a la transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación de esas sociedades; los de aumento, reducción o reintegración de capital; la emisión de debentures u obligaciones negociables; los referidos con la integración de los órganos de administración, representación, o fiscalización; el cambio de domicilio o determinación de sede y los demás que imponga la ley. No se aplica este inciso a las sociedades indicadas en el inciso siguiente ni a las cooperativas o a las sociedades excluidas por leyes especiales.

c) En las sociedades previstas en la Sección Cuarta del Capítulo I de la Ley de Sociedades su disolución, subsanación y liquidación, pueden inscribirse también la transferencia de partes sociales y la exclusión o retiro de socios.

d) Los contratos, la designación y cese de administradores o gerentes y los demás instrumentos de sociedades constituidas en el extranjero, en las condiciones indicadas por la ley de sociedades.

e) Los contratos constitutivos de fundaciones y asociaciones civiles y los demás instrumentos relativos a actos de estas personas jurídicas indicados en la ley o en el inciso b) de este artículo.

f) Los contratos de agrupaciones de colaboración, uniones transitorias u otros asociativos que correspondan, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1360.

g) Los reglamentos de gestión de fondos comunes de inversión, sus reformas o su rescisión.

h) El sistema de registración contable y, en su caso, la individualización de los libros respectivos o las autorizaciones concedidas de acuerdo con el artículo 310.

i) Las transferencias de partes sociales o cuotas de interés y los documentos de constitución, modificación, transferencia o cancelación de derechos reales, así como los embargos u otras medidas cautelares sobre ellas.

j) La apertura de concursos preventivos o la declaración de quiebras con relación a personas jurídicas registradas, así como la conclusión u otros modos de terminación de esos procesos.

k) La transmisión de establecimientos comerciales o industriales, conforme con la ley respectiva.

l) Los instrumentos que dispongan inhibiciones y otras anotaciones personales sobre personas jurídicas registradas.

m) Los demás instrumentos cuya registración imponga la ley.

Si alguno de los actos mencionados requiere una autorización estatal previa conforme con la ley, no se debe inscribir el instrumento sin la comprobación de la existencia de esa autorización.

ARTÍCULO 299.- Efectos. Plazo. La registración no subsana los defectos ni convalida la invalidez de los instrumentos o de los actos reflejados en ellos.

Los instrumentos que deban registrarse deben presentarse ante el Registro dentro de los quince (15) días de su otorgamiento. Presentados con posterioridad, pueden ser inscriptos no mediando oposición de parte interesada fundada en justa causa y no tiene efecto sino desde la fecha del registro.

ARTÍCULO 300.- Matriculación en folios móviles. La incorporación al Registro de los instrumentos se cumplimenta mediante la matriculación en un soporte especial que puede ser informático con ordenamiento numérico o alfanumérico.

El Registro debe llevar ordenamiento separado según los distintos instrumentos o conjuntos de instrumentos que considere convenientes; confeccionar índices para la consulta pública; y elaborar y conservar legajos individuales respecto de las personas humanas o jurídicas inscriptas.

ARTÍCULO 301.- Carácter público del Registro. El Registro es público para todo aquel que tenga interés en conocer el estado jurídico de los sujetos, bienes y cosas registradas.

Las leyes y reglamentaciones locales determinan las formas de consulta, así como los testimonios, certificados e informes que debe expedir el Registro.

SECCIÓN SEXTA. Contabilidad y estados contables.

ARTÍCULO 302.- Obligados. Excepciones. Están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realicen una actividad económica organizada o sean titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial o de servicios. Cualquier otra persona puede llevar contabilidad, solicitando su inscripción y la habilitación de sus registros o la rubricación de los libros, como se prevé en este mismo Capítulo.

Sin perjuicio de leyes especiales, quedan excluidas de las cargas previstas en esta Sección todas las personas humanas o jurídicas que desarrollen profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas. Se consideran conexas las actividades dirigidas a la transformación o a la enajenación de productos agropecuarios cuando están comprendidas en el ejercicio normal de tales actividades. También pueden ser eximidas de llevar contabilidad las actividades que, por volumen de su giro, resulte inconveniente sujetar a tales deberes conforme determine cada jurisdicción local.

ARTICULO 303.- Sistema de registración. La contabilidad es un sistema de registros contables y puede llevarse mediante métodos mecánicos o soportes electrónicos o libros.

ARTÍCULO 304.- Modo de llevar la contabilidad. La contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse, conforme a los principios y normas contables emanados de los organismos públicos o profesionales

correspondientes, de modo que se permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Los asientos deben completarse con la documentación respectiva, todo lo cual debe archivar en forma metódica y que permita su localización y consulta.

ARTÍCULO 305.- Registros indispensables. Son registros indispensables los siguientes:

- a) Diario.
- b) Inventario y balances.
- c) Aquellos que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exija la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar.
- d) Los que en forma especial impongan este Código u otras leyes.

ARTÍCULO 306.- Libros. El interesado puede llevar su contabilidad mediante la utilización de libros; en ese caso debe presentarlos, debidamente encuadernados, para su individualización en el Registro Público de Actividades Especiales.

Tal individualización consiste en anotar, en el primer folio, nota fechada y firmada de su destino, del nombre de su titular y del número de folios que contenga.

El Registro debe llevar una nómina alfabética, de consulta pública, de las personas que solicitan rubricación de libros o autorización para llevar los registros contables de otra forma.

ARTÍCULO 307.- Prohibiciones. Se prohíbe:

- a) Alterar el orden en que los asientos deben ser hechos.
- b) Dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones o adiciones entre los asientos.
- c) Interlinear, raspar, enmendar o tachar. Todas las equivocaciones y omisiones deben salvarse mediante un nuevo asiento hecho en la fecha en que se advierta la omisión o el error.
- d) Mutilar parte alguna del libro, arrancar hojas o alterar la encuadernación o foliatura.

ARTÍCULO 308.- Forma de llevar los registros. Los registros contables deben ser llevados en forma cronológica, actualizada, en idioma y moneda nacional, sin alteración alguna que no haya sido debidamente salvada.

Deben permitir determinar al cierre de cada ejercicio económico la situación patrimonial de su titular, su evolución y sus resultados.

ARTÍCULO 309.- Diario. En el Diario se deben registrar todas las operaciones relativas a la actividad de la persona, individualmente o en registros resumidos que cubran períodos de duración no superiores al mes. Estos resúmenes deben

surgir de anotaciones detalladas practicadas en subdiarios.

El registro o Libro Caja y todo otro subdiario auxiliar que forma parte del sistema de registraciones contables integra el Diario.

ARTÍCULO 310.- Conservación. Salvo que leyes especiales establezcan plazos superiores, deben conservarse por cinco (5) años:

- a) Los libros, contándose el plazo desde el último asiento.
- b) Los demás registros, desde su fecha.
- c) Los instrumentos respaldatorios, desde su fecha.

Los herederos deben conservar los libros del causante y, en su caso, exhibirlos en la forma prevista en el artículo 313, hasta que se cumplan los plazos indicados en el primer párrafo.

ARTÍCULO 311.- Actos sujetos a autorización. El titular puede, previa autorización del Registro Público de Actividades Especiales de su domicilio:

- a) Sustituir uno o más libros, salvo el de Inventarios y Balances, o alguna de sus formalidades, por la utilización de ordenadores u otros medios mecánicos, magnéticos o electrónicos que permitan la individualización de las operaciones y de las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación.
- b) Conservar la documentación en microfilm, discos ópticos u otros medios aptos para ese fin.

La petición que se formule al Registro Público debe contener una adecuada descripción del sistema, con dictamen técnico e indicación de los antecedentes de su utilización. Una vez aprobada, esta información debe transcribirse en el libro de Inventarios y Balances.

La petición se considera automáticamente aprobada si dentro de los treinta (30) días de formulada no es objeto de observación o rechazo fundado por el Registro Público.

ARTÍCULO 312.- Eficacia probatoria. La contabilidad, obligada o voluntaria, llevada en la forma y con los requisitos prescritos, será admitida en juicio, como medio de prueba.

Sus registros prueban contra quien la lleva o sus sucesores, aunque no estuvieren en forma, sin admitírseles prueba en contrario; pero el adversario no puede aceptar los asientos que le sean favorables y desechar los que le perjudiquen, sino que habiendo adoptado este medio de prueba, debe estarse por las resultas combinadas que presenten todos los registros relativos al punto cuestionado.

La contabilidad, obligada o voluntaria, prueba en favor de quien la lleva, cuando en litigio contra otro sujeto que tiene contabilidad, obligada o voluntaria, éste no presenta registros contrarios incorporados en una contabilidad regular.

Sin embargo, el tribunal tiene en tal caso la facultad de apreciar esa prueba,

y de exigir, si lo considera necesario, otra supletoria.

Finalmente, cuando resulte prueba contradictoria de los registros de las partes que litigan, y unos y otros se hallen con todas las formalidades necesarias y sin vicio alguno, el tribunal debe prescindir de este medio de prueba y proceder por los méritos de las demás probanzas que se presenten, calificándolas con arreglo a las disposiciones de este Código.

Si se trata de litigio contra quien no está obligado a llevar contabilidad, ni la lleva voluntariamente, ésta sólo sirve como principio de prueba.

La prueba que resulte de la contabilidad es indivisible.

ARTÍCULO 313.- Investigaciones. Ninguna autoridad, bajo pretexto alguno, puede hacer pesquisas de oficio para inquirir si las personas llevan o no registros arreglados a derecho.

La prueba sobre la contabilidad debe realizarse en el lugar en que ésta sea llevada, aun cuando esté fuera de la competencia territorial del tribunal que la ordene.

La exhibición general de registros o libros contables sólo puede decretarse a instancia de parte en los juicios de sucesión, todo tipo de comunión o sociedad, administración por cuenta ajena y en caso de liquidación, concurso o quiebra. Fuera de estos casos sólo puede requerirse la exhibición de registros o libros en cuanto tenga relación con la cuestión controvertida de que se trata.

ARTÍCULO 314.- Estados contables. Al cierre del ejercicio quien lleva contabilidad obligada o voluntaria debe confeccionar sus estados contables, que comprendan como mínimo un estado de situación patrimonial y un estado de resultados que deben asentarse en el registro de inventarios y balances.

ARTÍCULO 315.- Reglamentaciones. Los registros públicos, así como los organismos con facultades para ello, pueden dictar disposiciones reglamentarias relativas a los estados contables.

TÍTULO V. De los vicios de la voluntad y de los actos jurídicos.

CAPÍTULO I. Error.

ARTÍCULO 316.- Error esencial. El error de hecho excusable provoca la invalidez del acto jurídico, si recae sobre:

- a) La naturaleza del acto.
- b) El objeto del acto, por haberse designado un bien o un hecho diverso o de distinta especie que el que se pretendió designar, o una cantidad, extensión o suma diferente a la querida.
- c) La cualidad sustancial del bien que constituye el objeto del acto, que haya sido determinante del consentimiento según la apreciación común o las circunstancias del caso.
- d) Los móviles o motivos personales, comunes a las partes, que explícita o

implícitamente integren la declaración de la voluntad.

e) La persona con la cual se celebra o a la cual se refiere el acto, si ella fue esencial para su celebración.

ARTÍCULO 317.- Error de cálculo. El error de cálculo no da lugar a la invalidez del acto, sino solamente a su rectificación, salvo que sea determinante de la voluntad.

ARTÍCULO 318.- Subsistencia del acto rectificado. La parte que incurre en error susceptible de anular el acto, queda sujeta a sus consecuencias conforme al alcance asignado por ella, si la otra parte consiente en ejecutarlo de ese modo

ARTÍCULO 319.- Error en la declaración. Las disposiciones de los artículos anteriores son aplicables al error en la declaración de voluntad y a la inexacta transmisión de ella hecha por el nuncio.

CAPÍTULO II. Dolo.

ARTÍCULO 320.- Definición. Hay dolo en la celebración de un acto jurídico cuando una parte induce a error a la otra parte para que ésta lo otorgue.

ARTÍCULO 321.- Requisitos. El dolo provoca la invalidez del acto jurídico, si reúne los siguientes caracteres:

- a) Ser grave.
- b) Ser determinante del consentimiento.
- c) Causar un daño importante.
- d) No haber habido dolo por ambas partes.

ARTÍCULO 322.- Dolo incidental. El dolo que no reúne los caracteres de los incisos a) a c) del artículo precedente, no afecta la validez del acto, pero el autor debe satisfacer los daños que haya causado

ARTÍCULO 323.- Dolo del tercero. El dolo que provoca la invalidez del acto puede provenir de alguna de las partes o de un tercero. Si al tiempo de la celebración del acto una de las partes tuvo conocimiento del dolo cometido por un tercero, debe responder solidariamente con éste por los daños causados. En los demás casos el tercero es el único responsable.

CAPÍTULO III. Violencia.

ARTÍCULO 324.- Fuerza e intimidación. La fuerza irresistible y las injustas amenazas que causan a la parte a la cual se dirigen el temor de sufrir un mal grave e inminente en su persona, en sus bienes o en la persona o bienes de un tercero, provocan la invalidez del acto. Para juzgar la trascendencia de las amenazas, deben tenerse en cuenta las condiciones del amenazado.

ARTÍCULO 325.- Temor reverencial. Ejercicio de un derecho. No configuran violencia ni el temor reverencial ni el ejercicio regular de un derecho.

ARTÍCULO 326.- Violencia de un tercero. La violencia que proviene de un tercero

también hace inválido el acto. El resarcimiento de los daños causados, se rige por el artículo 323.

CAPÍTULO IV. Lesión.

ARTÍCULO 327.- Lesión. Puede demandarse la invalidez o la modificación del acto jurídico cuando una de las partes obtiene una ventaja patrimonial notablemente desproporcionada y sin justificación, explotando la necesidad, la inexperiencia, la ligereza, la condición económica, social o cultural que condujo a la incomprensión del alcance de las obligaciones, la avanzada edad, o el sometimiento de la otra a su poder resultante de la autoridad que ejerce sobre ella o de una relación de confianza. La explotación se presume cuando el demandante prueba alguno de estos extremos o que fue sorprendido por la otra parte y, en todos los casos, la notable desproporción de las prestaciones.

Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de la demanda. La acción sólo puede ser intentada por el lesionado o sus herederos.

El actor tiene opción para demandar la invalidez o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se transforma en acción de reajuste, si éste es ofrecido por el demandado al contestar la demanda. En este caso debe ser oído el actor.

La adecuación debe procurar el reajuste equitativo de las prestaciones, tomando en cuenta la índole del acto, los motivos o propósitos de carácter económico que tuvieron las partes al celebrarlo, y la factibilidad de su ejecución. En caso de reajuste se aplica el cuarto párrafo del artículo 1061.

CAPÍTULO V. Simulación.

ARTÍCULO 328.- Definición. Existe simulación cuando las partes otorgantes del acto aparente han acordado declarar una voluntad distinta de la real.

ARTÍCULO 329.- Simulación lícita e ilícita. La simulación ilícita o que perjudica a un tercero, provoca la invalidez del acto jurídico ostensible. Si el acto simulado encubre otro real, éste es plenamente eficaz con tal de que no sea ilícito ni perjudique a un tercero.

ARTÍCULO 330.- Acción entre las partes. Contradocumento. Los que otorgan un acto simulado ilícito o que perjudica a terceros, no pueden ejercer acción alguna el uno contra el otro sobre la simulación, salvo que la acción tenga por objeto dejar sin efecto el acto y las partes no puedan obtener ningún beneficio de la simulación.

La simulación alegada por las partes debe probarse mediante el respectivo contradocumento. Puede prescindirse de él, cuando la parte justifica las razones por las cuales no existe o no puede ser presentado, y median circunstancias que hacen inequívoca la simulación.

ARTÍCULO 331.- Acción de terceros. Los terceros cuyos derechos o intereses legítimos son afectados por el acto simulado, pueden demandar su invalidez.

Pueden acreditar la simulación por cualquier medio de prueba.

ARTÍCULO 332.- Efectos frente a acreedores. La simulación no puede oponerse a los acreedores del adquirente simulado que de buena fe hubiesen ejecutado los bienes comprendidos en el acto.

Los acreedores del enajenante simulado prevalecen sobre los acreedores quirografarios del adquirente, si sus créditos son de causa anterior al acto.

CAPÍTULO VI. Fraude.

ARTÍCULO 333.- Sanción. Todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos, y de las renunciaciones al ejercicio de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar su estado de fortuna.

ARTÍCULO 334.- Requisitos. Son requisitos de procedencia de la acción de declaración de inoponibilidad:

- a) Que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado, salvo que el deudor haya actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores.
- b) Que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor.

ARTÍCULO 335.- Acto oneroso. Para que pueda ser impugnado un acto a título oneroso, es necesario que quien contrató con el deudor haya conocido que el acto provocaba o agravaba la insolvencia.

ARTÍCULO 336.- Acción contra el subadquirente. Si la persona en favor de la cual el deudor otorgó el acto impugnado, transmitió a otro los derechos obtenidos, la acción de los acreedores contra el subadquirente sólo procede si la transmisión se le hace por título gratuito o si es cómplice en el fraude. El que contrató con el deudor, y el subadquirente de mala fe, deben indemnizar a los acreedores que ejerzan la acción, si la cosa se pierde para aquéllos o pasa a un adquirente de buena fe y a título oneroso.

ARTÍCULO 337.- Extinción de la acción. Cesa la acción de los acreedores si el adquirente de los bienes transmitidos por el deudor los desinteresa o da garantía suficiente.

ARTÍCULO 338.- Extensión de la inoponibilidad. La declaración de inoponibilidad se pronuncia exclusivamente en interés de los acreedores que la promueven, y hasta el importe de sus respectivos créditos.

TÍTULO VI. De las modalidades de los actos jurídicos.

CAPÍTULO I. Condición.

ARTÍCULO 339.- Principio. La eficacia de un acto jurídico puede quedar supeditada a un hecho futuro e incierto. Del hecho puesto como condición puede depender que el acto adquiera plena eficacia en el futuro, o que se resuelva un acto actualmente eficaz.

ARTÍCULO 340.- Efecto retroactivo. La eficacia del acto, o su resolución, operan

con retroactividad al día en que se celebra, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

ARTÍCULO 341.- Condiciones prohibidas. Es inválido el acto cuya eficacia se supedita a un hecho imposible, contrario a la moral o prohibido por las leyes.

Si el hecho depende exclusivamente de la voluntad del obligado, el acto es inválido; pero es válido si la condición consiste en un hecho que aquél puede ejecutar o no ejecutar, salvo que afecte derechos garantizados constitucionalmente.

La condición de no realizar un hecho imposible, ilícito o inmoral, no perjudica la eficacia del acto.

ARTÍCULO 342.- Cumplimiento. Las condiciones deben cumplirse del modo en que las partes entendieron razonablemente que debían serlo. El incumplimiento de la condición no puede ser invocado por la parte que, de mala fe, impide su realización.

ARTÍCULO 343.- Condición pendiente. Efectos. El adquirente de un derecho supeditado a condición suspensiva puede solicitar medidas conservatorias para asegurar la efectividad de su derecho.

El adquirente de un derecho sujeto a condición resolutoria puede ejercitarlo, pero la otra parte puede solicitar medidas conservatorias. Los actos de disposición son inválidos si, por medio de ellos, se impide el efecto del cumplimiento de la condición.

ARTÍCULO 344.- Cumplimiento de la condición. El cumplimiento de la condición obliga a las partes a entregarse o restituirse, recíprocamente, lo que les habría correspondido al tiempo de la celebración del acto. En tal caso:

- a) Si la condición es suspensiva, el objeto prometido debe entregarse con sus accesorios y los frutos pendientes al tiempo de cumplirse la condición.
- b) Si la condición es resolutoria, debe restituirse el objeto recibido con sus accesorios, pero no se deben los frutos percibidos hasta el momento de cumplirse la condición.

En ambos casos subsiste la eficacia de los actos de administración ejecutados con anterioridad al cumplimiento de la condición.

ARTÍCULO 345.- No cumplimiento de la condición. Si el acto celebrado bajo condición suspensiva se ejecuta antes del cumplimiento de la condición, y ésta no se cumple después, debe restituirse el objeto con sus accesorios pero no los frutos percibidos.

CAPÍTULO II. Plazo.

ARTÍCULO 346.- Principio. La ejecución y la resolución de un acto jurídico pueden quedar diferidos al vencimiento de un plazo.

ARTÍCULO 347.- Beneficiario del plazo. El plazo se presume establecido en

beneficio de ambas partes salvo que, por la naturaleza del acto o por otras circunstancias, resulte que ha sido previsto en favor del acreedor.

ARTÍCULO 348.- Distinción con la condición. Se entiende que hay plazo y no condición si el hecho futuro necesariamente ha de producirse, y se entiende que hay condición y no plazo si el hecho no ha de producirse necesariamente.

ARTÍCULO 349.- Pago anticipado. El obligado que cumple o restituye antes del plazo no puede repetir lo pagado.

ARTÍCULO 350.- Caducidad del plazo. El obligado a cumplir al vencimiento de un plazo no puede invocarlo si está quebrado, si disminuye por acto propio las seguridades otorgadas al acreedor para el cumplimiento de la obligación, o si no ha constituido las garantías prometidas.

Si la cosa prendada o hipotecada se ejecuta en subasta judicial o administrativa, o ejecución extrajudicial, caduca el plazo de la obligación principal.

CAPÍTULO III. Cargo.

ARTÍCULO 351.- Cargo. Cargo como condición. Presunción. El cargo es una obligación accesorias impuesta al adquirente de un derecho. No impide los efectos del acto salvo que su cumplimiento se haya previsto como condición suspensiva, ni los resuelve, salvo que su cumplimiento se haya previsto como condición resolutoria. En caso de duda se entiende que tal condición no existe.

ARTÍCULO 352.- Tiempo de cumplimiento. Se aplica al tiempo de cumplimiento del cargo lo dispuesto en los artículos 825 y 826.

ARTÍCULO 353.- Transmisibilidad. La obligación de cumplir el cargo se transmite a los subadquirentes por actos entre vivos o por causa de muerte, salvo que sólo pueda ser ejecutado por quien se obligó inicialmente a cumplirlo.

ARTÍCULO 354.- Cargo prohibido. La estipulación como cargo en los actos jurídicos onerosos, de hechos que no pueden serlo como condición, se tiene por no escrita, pero no provoca la invalidez del acto.

TÍTULO VII. De la representación.

CAPÍTULO I. Disposiciones generales.

ARTÍCULO 355.- Principio. Fuentes. Los actos jurídicos entre vivos pueden ser celebrados por medio de representante, salvo en los casos en que la ley exige su otorgamiento por el titular del derecho.

La representación es conferida por un acto de apoderamiento del representado o por la ley. La representación en las relaciones de familia se rige en subsidio por las disposiciones de este Título.

ARTÍCULO 356.- Efectos. Incapacidad del representante. Los actos celebrados por el representante en nombre del representado y en los límites de las facultades conferidas por la ley o por el acto de apoderamiento, producen efecto directamente para el representado.

ARTÍCULO 357.- Extensión. La representación comprende los actos a que se refiere el apoderamiento, o las facultades otorgadas por la ley al representante si la representación es conferida por ésta, y asimismo los actos necesarios para su ejecución.

Las limitaciones o la extinción de la representación, así como las instrucciones del representado al representante para su ejercicio, son oponibles a terceros si éstos tienen conocimiento de ellas, o hubieron de haberlas conocido actuando con la diligencia que exigen las circunstancias del negocio.

Si la voluntad de obrar en nombre de otro no aparece claramente, se entiende que el agente ha actuado por cuenta propia.

ARTÍCULO 358.- Vicios. El acto otorgado por el representante es inválido si su voluntad está viciada. Pero si se ha otorgado en ejercicio de facultades previamente determinadas por el representado, es inválido sólo si estuvo viciada la voluntad de éste.

El representado de mala fe no puede aprovecharse de la ignorancia o la buena fe del representante.

ARTÍCULO 359.- Acto consigo mismo. Nadie puede, en representación de otro, efectuar consigo mismo un acto jurídico, sea por cuenta propia o de un tercero, sin la autorización del representado. Tampoco puede el representante, sin la conformidad del representado, aplicar fondos o rentas obtenidos en ejercicio de la representación a sus propios negocios, o a los ajenos confiados a su gestión.

ARTÍCULO 360.- Responsabilidad por inexistencia o exceso en la representación. Si alguien actúa como representante de otro sin serlo, o en exceso de las facultades conferidas por el representado, es responsable del daño que la otra parte sufre por haber confiado, sin culpa suya, en la validez del acto; si hace saber al tercero la falta o deficiencia de su poder, está exento de dicha responsabilidad.

ARTÍCULO 361.- Ratificación. La ratificación suple el defecto de representación. Los interesados pueden requerirla fijando para ello un plazo cierto y razonable, comunicando al titular del derecho lo actuado en su nombre. El silencio del requerido se juzga como negativa a ratificar.

ARTÍCULO 362.- Efectos de la ratificación. La ratificación tiene efecto retroactivo al día del acto, pero es inoponible a terceros que, con anterioridad a ella, hayan adquirido derechos.

Antes de la ratificación, el tercero y quien actúa como representante o gestor pueden acordar que el acto quede sin efecto.

CAPÍTULO II. Representación convencional.

ARTÍCULO 363.- Límites. Sólo puede darse poder para actos que el representado puede otorgar por sí mismo.

ARTÍCULO 364.- Forma. El poder debe ser otorgado en la forma prescripta para el

acto que el representante deba realizar.

ARTÍCULO 365.- Extensión. Las facultades contenidas en el poder son de interpretación estricta. Cuando se trata de un poder conferido en términos generales, sólo puede incluir los actos propios de una administración ordinaria.

ARTÍCULO 366.- Facultades expresas. Son necesarias facultades expresas para:

- a) Contraer matrimonio.
- b) Peticionar el divorcio, la separación judicial, la separación judicial de bienes o la liquidación anticipada del régimen matrimonial de participación.
- c) Convenir el cambio del régimen patrimonial del matrimonio.
- d) Reconocer hijos, caso en el cual debe ser individualizada la persona que ha de ser reconocida.
- e) Aceptar herencias.
- f) Constituir, transferir, modificar o extinguir derechos reales sobre inmuebles u otros bienes registrables.
- g) Crear obligaciones por una declaración unilateral de voluntad.
- h) Reconocer o novar obligaciones anteriores al otorgamiento del poder.
- i) Otorgar el asentimiento conyugal si el acto lo requiere, debiendo identificarse los bienes a que se refiere.
- j) Hacer pagos que no sean los ordinarios de la administración.
- k) Renunciar, transar o someter a juicio arbitral derechos u obligaciones, sin perjuicio de las reglas especiales aplicables en materia de concursos.
- l) Formar sociedades.
- m) Dar o tomar inmuebles en locación por más de tres (3) años o cobrar alquileres anticipados por más de un año.
- n) Realizar donaciones que excedan pequeñas gratificaciones habituales.
- ñ) Dar fianzas, comprometer servicios personales, recibir cosas en depósito, y dar o tomar dinero en préstamo, salvo cuando estos actos correspondan al objeto para el que se otorgó un poder en términos generales.

ARTÍCULO 367.- Copia. Los terceros pueden exigir que el representante suscriba y les entregue copia firmada por él del instrumento del que resulta su representación.

ARTÍCULO 368.- Representación tácita. Si alguien actúa como apoderado de otro y en su nombre, con su conocimiento y sin su oposición, se entiende que le ha otorgado tácitamente poder suficiente.

ARTÍCULO 369.- Facultades implícitas. Se presume que:

- a) Quien de manera notoria tiene la administración de un establecimiento abierto al público es apoderado para todos los actos propios de la gestión ordinaria de éste.

b) Los dependientes que se desempeñan en el establecimiento están autorizados para todos los actos que ordinariamente corresponden a las funciones que realizan.

c) Los dependientes encargados de entregar mercaderías fuera del establecimiento están autorizados a percibir su precio contra entrega de recibo.

ARTÍCULO 370.- Sustitución. El representante puede sustituir el poder en otro. Responde por el sustituto si incurre en culpa al elegir.

El representado puede prohibir la sustitución. No obstante, el representante puede sustituir si es indispensable conforme a las circunstancias, con la responsabilidad dispuesta en el párrafo anterior.

El representado puede indicar la persona del sustituto, caso en el cual el representante no responde por éste.

ARTÍCULO 371.- Pluralidad de representantes. Si hay varios representantes sin indicación de que deban actuar conjuntamente, cualquiera de ellos puede hacerlo indistintamente

ARTÍCULO 372.- Revocación. El poder puede ser revocado en cualquier momento.

No obstante, puede ser irrevocable siempre que se otorgue para negocios especiales, limitado en el tiempo, y en razón de un interés legítimo exclusivo del representante, común a éste y al representado, o de un tercero; este poder sólo puede revocarse si media justa causa y se extingue por el transcurso del plazo establecido, salvo estipulación en contrario.

ARTÍCULO 373.- Revocación tácita. La designación de un nuevo representante para el mismo asunto o la intervención directa del representado importan la revocación del poder precedente en tanto sean incompatibles con éste. La revocación produce efecto respecto del anterior representante desde que quede notificado de ella si antes no tuvo conocimiento por otro medio.

ARTÍCULO 374.- Apoderamiento plural. El poder otorgado por varias personas para un objeto de interés común puede ser revocado por cada una de ellas sin dependencia de las otras.

ARTÍCULO 375.- Renuncia. El representante puede renunciar al poder, dando aviso al representado, pero está obligado a continuar en la representación hasta que el representado esté en condiciones de reemplazarlo o actuar por sí, salvo impedimento grave o justa causa.

La cláusula de irrenunciabilidad sólo es válida si está limitada a un tiempo razonable conforme a las circunstancias del caso.

ARTÍCULO 376.- Extinción. Los poderes se extinguen simultáneamente con el cumplimiento de los actos para los cuales son conferidas las facultades de representación.

ARTÍCULO 377.- Oponibilidad a terceros. Las modificaciones, la renuncia y la revocación de los poderes deben ser puestas en conocimiento de los terceros por medios idóneos. En su defecto, no son oponibles a los terceros, a menos que se pruebe que éstos conocían las modificaciones o la revocación en el momento de celebrar el negocio.

Las demás causas de extinción del poder no son oponibles a los terceros que las hayan ignorado sin su culpa.

ARTÍCULO 378.- Restitución de documentos. Terminada la representación, o revocados los poderes, el representante debe devolver los documentos de los que resultaba su representación; puede exigir que se le extienda recibo en una copia de tales documentos.

TÍTULO VIII. De la ineficacia de los actos jurídicos.

CAPÍTULO I. Disposiciones generales.

ARTÍCULO 379.- Categorías de ineficacia. Los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su invalidez o de su inoponibilidad respecto de determinadas personas.

La resolución, rescisión o revocación provocan la ineficacia sobreviniente, sin perjuicio de los efectos cumplidos en su caso.

ARTÍCULO 380.- Articulación. La invalidez puede argüirse por vía de acción u oponerse como excepción. En todos los casos debe sustanciarse.

ARTÍCULO 381.- Conversión. El acto inválido puede convertirse en otro diferente válido cuyos requisitos esenciales satisfaga, si el fin perseguido por las partes permite suponer que ellas lo habrían querido si hubiesen previsto la invalidez.

ARTÍCULO 382.- Acto indirecto. Un acto jurídico celebrado para obtener un resultado que es propio de los efectos de otro acto, es válido si no se otorga para eludir una prohibición de la ley o para perjudicar a un tercero.

CAPÍTULO II. Nulidad absoluta y relativa.

ARTÍCULO 383.- Criterio de distinción. Son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público o la moral.

Son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción sólo en protección del interés de ciertas personas.

ARTÍCULO 384.- Nulidad absoluta. No saneamiento. La nulidad absoluta debe declararse por el tribunal, aun sin mediar petición de parte, si aparece manifiesta. Puede alegarse por el Ministerio Público y por cualquier interesado, salvo por la parte que invoque la propia torpeza para lograr un provecho.

No puede sanearse por la confirmación del acto ni por la prescripción.

ARTÍCULO 385.- Nulidad relativa. La nulidad relativa sólo puede declararse a instancia de las personas en cuyo beneficio se establece.

La nulidad de los actos otorgados por incapaces de ejercicio no puede ser alegada por la parte capaz. Los incapaces o sus representantes tampoco pueden hacerlo si obraron con dolo.

Los vicios de la voluntad sólo pueden ser invocados por la persona que los ha padecido.

Puede sanearse por la confirmación del acto y por la prescripción de la acción.

CAPÍTULO III. Nulidad total y parcial.

ARTÍCULO 386.- Principio. La nulidad de una disposición del acto no afecta a las otras disposiciones válidas, si son separables.

CAPÍTULO IV. Efectos de la invalidez.

ARTÍCULO 387.- Restitución. La nulidad obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido en virtud o por consecuencia del acto. Estas restituciones se rigen por las disposiciones relativas a las relaciones reales de buena o de mala fe, según sea el caso.

ARTÍCULO 388.- Hechos simples. Los actos jurídicos inválidos, aunque no produzcan los efectos de los actos válidos, dan lugar a las consecuencias de los hechos en general o, en su caso, a las reparaciones que corresponden.

ARTÍCULO 389.- Efectos respecto de terceros. Todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable, por una persona que ha llegado a ser propietario en virtud de un acto inválido, quedan sin ningún valor, y pueden ser reclamados directamente del tercero, salvo contra el subadquirente de derechos reales de buena fe y a título oneroso.

Los subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y a título oneroso si el acto se ha realizado sin intervención del titular del derecho.

CAPÍTULO V. Confirmación.

ARTÍCULO 390.- Requisitos. Hay confirmación si la parte que puede aducir la nulidad relativa manifiesta expresa o tácitamente su voluntad de tener al acto por válido, después de haber desaparecido la causa de la nulidad.

El acto de confirmación no requiere el concurso de la voluntad de la otra parte.

ARTÍCULO 391.- Forma. Si la confirmación fue expresa, el instrumento en que ella conste debe reunir las formas exigidas para el acto que se sana, y contener la mención precisa de éste, de la causa de la nulidad y de la voluntad de confirmarlo.

La confirmación tácita resulta del cumplimiento total o parcial del acto inválido realizado con conocimiento de la causa de invalidez, o de otro acto que importe la renuncia del derecho de alegar la nulidad.

ARTÍCULO 392.- Efecto retroactivo. La confirmación del acto originalmente inválido tiene efecto retroactivo a la fecha en que se celebró. Pero si se confirman dis-

posiciones de última voluntad, la confirmación opera desde la muerte del causante.

La retroactividad de la confirmación no perjudica los derechos de terceros de buena fe.

CAPÍTULO VI. Inoponibilidad.

ARTÍCULO 393.- Efectos del acto frente a terceros. La eficacia o ineficacia de un acto entre las partes no puede oponerse a terceros si la ley así lo establece.

ARTÍCULO 394.- Oportunidad para invocarla. La inoponibilidad puede hacerse valer en cualquier momento. Pero la acción para obtener su declaración comienza a prescribir a partir de la fecha en que el tercero conoció o pudo conocer la realización del acto.

TÍTULO IX. Del ejercicio de los derechos.

ARTÍCULO 395.- Buena fe. Los actos jurídicos deben ser celebrados y ejecutados con buena fe y lealtad. La parte que obra de mala fe debe resarcir el daño causado.

ARTÍCULO 396.- Abuso del derecho. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines que ella tuvo en mira al reconocerlos, o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral o las buenas costumbres.

El tribunal debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo y, según las circunstancias, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización.

ARTÍCULO 397.- Posición dominante. Lo dispuesto en los dos (2) artículos anteriores se aplica cuando se abusare de una posición dominante.

ARTÍCULO 398.- Sanciones conminatorias. El tribunal puede imponer en beneficio del titular del derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial.

Las condenas deben graduarse en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.

TÍTULO X. De la transmisión de los derechos.

ARTÍCULO 399.- Principio. Nadie puede transmitir a otro sobre un objeto, un derecho mejor o más extenso que el que gozaba.

ARTÍCULO 400.- Excepción. La regla del artículo precedente no se aplica al poseedor de cosa mueble no registrable, con el alcance del artículo 1828, ni al tercero adquirente de buena fe que ha adquirido un título valor conforme con la ley de circulación.

ARTÍCULO 401.- Sucesor universal. El sucesor universal es al mismo tiempo sucesor particular en cada uno de los objetos que integran la universalidad

transmitida.

Las deudas y los créditos se transmiten al sucesor universal, salvo:

- a) Si, por su naturaleza, son inseparables de la persona del deudor, o del acreedor.
- b) Si lo estipulan las partes o lo dispone la ley.

ARTÍCULO 402.- Derechos personales. El sucesor particular no es sucesor en los derechos personales de su autor con relación al objeto transmitido, a menos que lo contrario surja de la ley o del contrato.

ARTÍCULO 403.- Obligaciones. El sucesor universal y el particular suceden a su causante en las obligaciones que tienen causa en la titularidad del derecho real o de la relación real transmitidos; pero el sucesor particular responde sólo con la cosa sobre la cual recaen el derecho real o la relación real. El autor queda liberado, salvo estipulación o disposición legal.